



**Ministerio
de Cultura y
Educación**

La

niversidad

Boletín
informativo
de la

**Secretaría
de Políticas
Universitarias**

Año I. N° 1

1021.

Arg. II M.



Ministerio de Cultura y Educación
Secretaría de Políticas Universitarias

LA UNIVERSIDAD

Boletín Informativo

Secretaría de Coordinación Universitaria
Dr. Eduardo Roque Mundet

Primer Semestre 1994



Presidente de la Nación
Dr. Carlos Saúl Menem

Ministro de Cultura y Educación
Ing. Agr. Jorge Alberto Rodríguez

Secretario de Políticas Universitarias
Lic. Juan Carlos Del Bello

Subsecretario de Programación y Evaluación Universitaria
Lic. José Pagés Giribet

Subsecretario de Coordinación Universitaria
Dr. Eduardo Roque Mundet





"Universidad y Gobierno"

Por Jorge Rodríguez

"Bases para la Ley de Educación Superior"

Por Juan Carlos Del Bello

"El Consejo Nacional de Educación Superior"

Informe

"Evaluación y Acreditación en el Proyecto de Ley de Educación Superior"

Por Emilio F. Mignone

"Seminario Internacional de Evaluación y Acreditación Universitaria"

"David Woodhouse en la Argentina"

Consejos de Planificación Universitaria

Novedades Universitarias

"Sobre los convenios para el mejoramiento de la calidad celebrados con Universidades y Asociaciones de Facultades"

Por Carlos Marquis

Nuevas Iniciativas Privadas

75° aniversario de la Reforma Universitaria

Proyecto de Ley de Régimen Económico- financiero de las Universidades Nacionales

Programa de mejoramiento del Sistema de Información Universitaria

Por Marta Kisilevsky

Contribución Estudiantil

"La Opinión Pública y el Arancelamiento de la Universidad Nacional"

Encuesta

Programa de Incentivos para los Docentes-Investigadores

Programa de crédito universitario

La Secretaría de Políticas Universitarias en el "V° Saló de l'Ensenyament" de Barcelona, España.

Por Ana Zagari

El Consejo Interuniversitario Nacional y el Ministerio de Cultura y Educación

Funcionamiento de Universidades Privadas . Decreto 2330

Marco Regulatorio de Universidades Privadas

Programa de Créditos del Banco Mundial para las Universidades Nacionales

Incumbencias Profesionales Decreto 256/94

La Autonomía en Debate

Por Eduardo Sanchez Martinez

contenido

Editorial

OEI
OFICINA REGIONAL BUENOS AIRES
CENTRO DE RECURSOS
DOCUMENTALES E INFORMATICOS
CBEDI

Universidad y Gobierno

Por Jorge Rodríguez
Ministro de Educación de la Nación

Desde abril de 1993 y por primera vez en el país, el tratamiento de las cuestiones universitarias se realiza desde un ámbito con rango de Secretaría -la de Políticas Universitarias- que con un alto nivel de profesionalización, tiene como misión, con sus propuestas y con su accionar, demostrar la relevancia que el Poder Ejecutivo le otorga a la Educación Superior.

A través de ella, el Ministerio de Cultura y Educación ha tomado importantes iniciativas en el área, impulsando y promoviendo cambios en las Casas de Altos Estudios que persiguen los siguientes propósitos:

- Mejoramiento de la calidad académica.
- Aumento de la eficiencia de su gestión.
- Mejor articulación con la sociedad.

- Mayor pertinencia y equidad del servicio educativo.

- Garantizar la autonomía.

En los procesos de desarrollo e integración de la sociedad y de la economía, es innegable el valor estratégico que adquiere la Educación Superior, especialmente a partir del reconocimiento de la necesidad de que la Universidad argentina mejore sus niveles de excelencia, producción y transferencia de conocimientos.

Se ha trabajado incansablemente en la elaboración de nuevos marcos normativos que culminaron con el proyecto de Ley de Educación Superior que ya ha sido elaborado, sometido a diversas consultas -en las que ya hemos obtenido amplios consensos- y enviado al Honorable Congreso de la Nación; y con el proyecto de Nuevo

"Las Universidades han de ser Instituciones que trasciendan las personas y las generaciones."

Régimen Económico Financiero de las Universidades Nacionales que apunta a dotarlas de un mayor grado de autarquía económico-financiera.

La madurez, racionalidad y respeto mutuo en las relaciones entre el Gobierno y las Universidades han sido nuestro norte en el nuevo vínculo que se pretende desarrollar desde el MCyE con estas instituciones, tanto las pertenecientes al área estatal cuanto a las privadas.

El complejo tema de la evaluación ha sido concienzudamente analizado por el Consejo Nacional de Educación Superior que ha producido un dictamen que fue tomado como base para la elaboración del capítulo respectivo en el proyecto de Ley de Educación Superior. Asimismo, el Ministerio ha celebrado nueve convenios de evaluación con universidades y convenios con las Asociaciones de Facultades de Medicina y Ciencias Agrarias.

En cuanto a la cuestión

presupuestaria: el Gobierno Nacional fue, es y seguirá siendo, el principal sostén financiero de las Universidades Nacionales, al punto que en el Proyecto de Ley que establece el Régimen económico - financiero de las universidades existe la expresa prohibición a disminuir el aporte del Estado nacional a las mismas, en atención a los ingresos complementarios que pudieran obtener.

La Universidad ha de reencontrar su rumbo y superar su crisis en sintonía con las demandas más amplias de la sociedad y acorde con la importancia de su papel en la sociedad moderna.

El Ministerio de Cultura y Educación de la Nación cree en la capacidad de la Universidad y del Gobierno para generar un espacio de convivencia, puesto que las universidades han de ser instituciones que trasciendan las personas y las generaciones; cuya misión es conservar lo conocido y construir lo nuevo. ♣

Bases para la Ley de Educación Superior

Por Juan Carlos Del Bello
Secretario de Políticas Universitarias

Como es ya de conocimiento público, el Poder Ejecutivo Nacional ha elevado al Congreso de la Nación un **Proyecto de Ley de Educación Superior**, que tiende a completar el marco normativo destinado a regular la educación argentina, que en sus líneas centrales perfilara la Ley Federal de Educación sancionada a comienzos del año pasado.

Tal como ocurriera al discutirse esta norma, el debate que ahora nos ocupa no sólo es apasionante sino también necesario: la obsolescencia del régimen legal vigente y la consecuente necesidad de modernizar la legislación en vistas a desarrollar y promover nuevas modalidades institucionales y a mejorar los niveles de calidad, eficiencia y equidad con que el sistema de educación superior opera, plantea en efecto cuestiones de tal magnitud, que no se concibe abordarlas sin un serio intercambio de ideas y puntos de vista que contribuya a enriquecer su tratamiento y a sentar ciertas bases para un acuerdo necesario.

Mi propósito en estas notas es contribuir a ese debate, analizando brevemente algunos de los que pueden considerarse como "ejes centrales" de la normativa propuesta, particularmente en lo

relativo al nivel universitario.

1

Si centramos aquí nuestra atención en ese nivel de la enseñanza, no es porque subestimemos la importancia de la **educación superior no universitaria**, sino porque en el propio proyecto se ha dado a ella un tratamiento más bien sobrio, con el propósito de no cristalizar un espacio educativo entre nosotros todavía poco desarrollado pero que tiene sin embargo un respetable dinamismo. Por esa razón sólo se regula, en este punto, el marco normativo básico, dejándose lugar para nuevos desarrollos y nuevos perfiles institucionales (como los Colegios Universitarios y los Institutos Tecnológicos Universitarios) que bien concebidos e instrumentados pueden contribuir a desarrollar alternativas de enseñanza superior, que con el tiempo pueden ser una respuesta interesante a los crecientes desafíos que la sociedad de nuestros días está planteando. Por lo demás, no puede olvidarse que, conforme a la política de descentralización federal por la que el país ha optado, la educación superior no universitaria está en manos de las provincias, cuya autonomía en la materia se ha

querido en todo momento respetar.

2

En cuanto al **sistema universitario**, el proyecto presenta como novedad la definición de un "régimen normativo común" para todas las universidades, de gestión estatal o privada, sin desconocer por cierto las particularidades que las diferencia y que dan lugar a unas "normas específicas" para cada uno de esos regímenes.

Las normas comunes

Definir un régimen normativo común es imprescindible para contextualizar y organizar el funcionamiento de un verdadero "sistema" de universidades, que en la actualidad está constituido por setenta y dos instituciones, entre estatales y privadas, localizadas a lo largo de todo el país, en permanente búsqueda de respuesta a los cambios científico-tecnológicos y al rápido crecimiento de la demanda de educación universitaria, que ha duplicado los niveles de los años setenta.

Los principales ejes de ese marco normativo común tienen que ver con el régimen de títulos, con la evaluación y la acreditación

"Por lo que hace al *régimen de títulos*, hay dos aspectos que merecen comentarse: el relativo al modo de regular la habilitación profesional y el que tiene que ver con las atribuciones para definir el perfil y alcances de los títulos."

institucional, y con la definición y alcances de la autonomía universitaria.

a) Por lo que hace al *régimen de títulos*, hay dos aspectos que merecen comentarse: el relativo al modo de regular la habilitación profesional y el que tiene que ver con las atribuciones para definir el perfil y alcances de los títulos.

En cuanto a lo primero, existen en el mundo dos modelos principales: el que separa nítidamente la "acreditación académica" de la "habilitación profesional", que queda en manos de instancias que están fuera de la universidad (como ocurre en la tradición anglosajona, y en particular en los Estados Unidos), y el que las mantiene unidas, habilitando al poseedor de un título al ejercicio cuasi automático de la profesión respectiva (como sucede en la tradición latina, sobre todo de origen francés). Dentro de esta última alternativa pueden distinguirse a su vez dos modalidades: la que exige una regulación precisa y clara del proceso de formación profesional (como se acepta hoy en la Comunidad Económica Europea, que establece "directivas comunitarias" de aplicación obligatoria en los países miembros, relativas por ejemplo a la intensidad de la práctica profesional controlada

que han de asegurar las instituciones universitarias), y la que tiene hasta ahora vigencia en nuestro país, que otorga a las universidades la atribución de expedir títulos habilitantes, sin regulaciones ni evaluaciones que apunten a garantizar la competencia profesional de quienes van a ejercer actividades que pueden poner en serio riesgo la salud, la seguridad, los derechos o los bienes de los habitantes.

Atendiendo a la especial importancia que estos valores tienen para la comunidad, de lo cual el Estado no se puede desentender, y teniendo presente el avance y profundización de los procesos de integración regional, que ineludiblemente plantearán sus propias exigencias para la movilidad de los profesionales entre los países miembros, no parecen quedar dudas que la Argentina debe optar entre el primero de los modelos reseñados o la primera modalidad del segundo. No parece quedar ya espacio para seguir sosteniendo una modalidad que está demostrando crecientes dificultades y que tiene cada vez menos vigencia en el resto del mundo.

En las primeras versiones del anteproyecto que comentamos, se desarrollaban como alternativas ambas opciones. Luego del proceso

de consultas al que esos borradores fueron sometidos, se optó por la segunda posibilidad. Se establece así en el proyecto enviado al Congreso, que los títulos y grados que expidan las universidades acreditarán la formación académica recibida y habilitarán para el ejercicio profesional. Pero teniendo en cuenta la responsabilidad que en esta materia cabe al Estado, se establece también que, cuando se trate de títulos correspondientes a profesiones cuyo ejercicio pudiere comprometer de modo directo el interés público, se requerirá que se respeten algunos requisitos básicos, como la obligación de tener en cuenta los contenidos curriculares mínimos y los criterios sobre formación práctica que establezca el Ministerio de Cultura y Educación en consulta con el Consejo Universitario, así como la necesidad de que ese tipo particular de carreras sean periódicamente acreditadas.

En cuanto a la segunda cuestión planteada, el proyecto propone que el "perfil" de un título (entendido como el conjunto de conocimientos y capacidades que el mismo certifica) así como su "alcance" (actividades para las que tiene competencia su poseedor), serán por regla general fijados y dados a conocer por las propias instituciones universitarias, con la sola condición de que los planes de estudio

"Autonomía y planeamiento estratégico deben coexistir y no presentarse como antagónicos."

respectivos tengan en cuenta la carga horaria mínima que para ello fije el Ministerio de Cultura y Educación previa consulta con el Consejo Universitario.

Como pueden comprender quienes conocen de cerca el tema, esta propuesta implica una ampliación notable de la autonomía académica de las universidades. La misma sigue las ideas centrales del decreto 256/94 y elimina definitivamente la fijación de "incumbencias" por parte del Ministerio, que implica un procedimiento altamente burocratizado y fuertemente limitativo de dicha autonomía.

b) El segundo eje del marco normativo común tiene que ver con *la evaluación institucional y la acreditación de carreras* en vistas a mejorar la calidad de la educación superior y en particular de la educación universitaria. En este sentido, la Argentina está indudablemente rezagada respecto de la mayoría de los países desarrollados y también en relación a muchos países en desarrollo (como México, Chile, Brasil). La evaluación de las instituciones universitarias es hoy, en efecto, bajo formas y modalidades distintas, una práctica regular y sistemática en casi todas partes.

Atento a estas tendencias, que a

esta altura de los desarrollos institucionales puede decirse que están más allá de las modas y de los climas ideológicos, en el proyecto de Ley de Educación Superior enviado al Congreso se contempla la introducción de mecanismos de evaluación y acreditación de instituciones y carreras, con el objetivo fundamental de asegurar una mejora permanente de la calidad y la excelencia.

En esta perspectiva, y siguiendo en lo fundamental un dictamen sobre el tema del Consejo Nacional de Educación Superior, se considera en el proyecto que la evaluación debe comenzar por ser una autoevaluación. Con ese objeto se establece que todas las instituciones universitarias deben asegurar el funcionamiento de instancias internas de evaluación institucional, cuya función será la de analizar la actividad y producción docente, de investigación y de extensión, y también, en el caso de las instituciones estatales, su capacidad de gestión y desarrollo institucional.

Las autoevaluaciones se deben complementar con evaluaciones externas, que se harán en el marco de los objetivos definidos por cada universidad, que tendrán lugar cada cinco años, y que podrán estar a cargo de una Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación

Universitaria o bien de asociaciones voluntarias constituidas con ese fin y debidamente reconocidas, combinando así características del modelo francés (donde la evaluación está a cargo de una instancia estatal) y del modelo norteamericano (donde queda en manos de entidades privadas reconocidas).

Quiero subrayar estas garantías que el proyecto prevé para que la evaluación cumpla realmente su función y no se transforme en un instrumento de control con otros fines:

*la evaluación debe hacerse teniendo en cuenta los objetivos que cada institución haya definido para sí;

*en todos los casos la evaluación debe estar fundamentalmente en manos de pares académicos;

*la evaluación externa puede ser coordinada por un organismo estatal que ofrece seguridades de independencia o bien por asociaciones voluntarias que constituyan las propias universidades, entre las cuales éstas pueden libremente elegir.

El tercer eje (aunque tal vez el de mayor importancia) del marco normativo común que el proyecto

plantea, se relaciona con la *autonomía universitaria*, una cuestión ciertamente clave para el futuro de las universidades.

Luego de largos períodos de regímenes autoritarios, fue natural que en la primera etapa de retorno a la democracia la preocupación central de la comunidad universitaria fuera la de recuperar esa autonomía.

Hoy nadie cuestiona, en Argentina ni prácticamente en ningún país del mundo, que la autonomía universitaria es una condición necesaria para un desarrollo universitario de alta calidad y excelencia. Por esta elemental razón el proyecto afirma la autonomía, define sus alcances (que en varios puntos se amplía) y ofrece garantías para que no se la vulnere.

Pero con la misma claridad con que esto se afirma, debo agregar que autonomía plena no es lo mismo que soberanía, y que por lo tanto, las universidades no pueden ser un Estado dentro del Estado. Respetando esa autonomía, la coordinación, la cooperación y el planeamiento estratégico del área universitaria son hoy imprescindibles. Mucho más cuando se trata de un país con casi setenta universidades que debieran coordinar sus ofertas educativas, evitando superposiciones y simultáneamente cubriendo ausencias de ofertas académicas, sobre todo en el interior del país,

que fomentan el desarraigo y la migración de los jóvenes a los grandes conglomerados urbanos.

Por eso en el proyecto se prevén instancias de coordinación, de cooperación y de planeamiento del sistema universitario. Como puede observarse en los países que verdaderamente cuentan en educación superior, autonomía y planeamiento estratégico coexisten fecundamente y no se presentan como estérilmente antagónicos.

Las normas específicas

Junto al marco normativo común para el conjunto de las instituciones universitarias, era también imprescindible prever, por cierto, normas específicas para las universidades nacionales, para las universidades privadas y para las universidades provinciales.

a) En relación a las *universidades nacionales*, el proyecto prevé, entre otras, normas relativas a su creación y sostenimiento, a su gobierno y a ciertas bases organizativas mínimas.

Las universidades nacionales, concebidas como personas jurídicas de derecho público, sólo pueden crearse por ley de la Nación, como lo establece la legislación actual.

Pero en el proyecto se propone una innovación importante, y es que, además de preverse el crédito presupuestario correspondiente, la creación debe hacerse en base a un estudio de factibilidad que avale la iniciativa. Con ello se tiende a garantizar que el surgimiento de una nueva institución universitaria, con toda la complejidad que ello tiene, responda a necesidades reales y esté en condiciones de asegurar desde sus comienzos un razonable nivel académico.

Parece también imprescindible garantizar que el Estado nacional habrá de realizar el aporte financiero principal para el sostenimiento de las instituciones universitarias nacionales, a fin de asegurar que sus servicios se presten a todos los habitantes que lo requieran y tengan la formación requerida, sin ningún otro tipo de condicionamientos. Y simultáneamente, será conveniente promover la constitución de fundaciones, sociedades u otras formas de asociación civil, que contribuyan a apoyar la labor de las universidades y a facilitar sus relaciones con el medio.

El reconocimiento de una amplia autarquía económico-financiera, ha de considerarse por otra parte como un complemento indispensable de la autonomía académica e institucional.

La futura ley debiera prever también algunas normas básicas

"(...) hay que tener en cuenta que autonomía plena no es lo mismo que soberanía y que por lo tanto, las universidades estatales no pueden ser un Estado dentro del Estado."

"Para esta gestión educativa, de la que formamos parte, la construcción de la política educativa no se concibe como una operación vertical, de arriba a abajo, sino que se basa en el diálogo y en la búsqueda permanente de consensos."

relativas a su gobierno, que aseguren simultáneamente la participación de los distintos claustros, la mayor representación relativa de los profesores en los órganos colegiados, y requisitos mínimos de rendimiento académico exigibles a todos los estudiantes, y también, por cierto, a sus representantes en los órganos de gobierno. Que el rector y los decanos sean elegidos mediante elecciones directas -que es una propuesta del proyecto que algunos cuestionan- debiera en realidad verse como un paso importante tendiente a hacer más democrático el gobierno de las universidades.

b) Las normas sobre *universidades privadas*, recogen en lo fundamental la legislación vigente en la materia, previéndose entre otras cosas que deben constituirse como entidades sin fines de lucro, y que la autorización para funcionar requiere la presentación de un proyecto institucional y académico, que debe ser evaluado favorablemente por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Esto introduce una modificación importante, ya que en la propuesta la evaluación es fundamentalmente académica y tiende a garantizar la seriedad y calidad del emprendimiento desde su mismo comienzo.

Se propone también que durante los primeros seis años de funcionamiento, estas instituciones estén sujetas a un régimen de funcionamiento provisorio, con

autonomía limitada, y que sólo cumplido ese lapso y previo informe favorable de la referida Comisión, podrán solicitar el reconocimiento definitivo, a partir del cual gozarán de plena autonomía, aunque sujetas, como se ha dicho antes, a las normas comunes de evaluación institucional.

c) El capítulo sobre *universidades provinciales*, muy breve, trata de establecer las condiciones que se deberán tener en cuenta para que los estudios que en ellas se cursen y los títulos que expidan, tengan los efectos legales que el proyecto prevé, relacionados fundamentalmente con su validez nacional y con el carácter habilitante de los títulos para el ejercicio profesional en todas las jurisdicciones del país.

3

Finalmente, dos palabras en cuanto al **espíritu legislativo** que ha presidido la elaboración del proyecto. Para esta gestión educativa, de la que formamos parte, la construcción de la política educativa no se concibe como una operación vertical, de arriba a abajo, sino que se basa en el diálogo y en la búsqueda permanente de consensos.

En ese marco, se fueron elaborando sucesivas versiones del proyecto de Ley de Educación Superior (en rigor, de anteproyectos), que se enviaron en consulta a la comunidad universitaria, a las autoridades educativas provinciales (porque hay en la propuesta un componente importante de educación superior no universitaria, que está en manos de las provincias), a las academias nacionales, a los organismos de control de las profesiones, y a otras entidades vinculadas directamente con la Educación Superior. Sus opiniones, comentarios, críticas y observaciones, cuidadosamente analizadas y discutidas, han servido para mejorar y enriquecer un proyecto que recoge en la mayor medida posible el fruto de la discusión seria y del debate profundo, como corresponde a una sociedad madura.

Serán ahora los representantes del pueblo de la Nación, en el Congreso, quienes tendrán la última palabra en la materia. Muchos legisladores nacionales tienen también iniciativas acerca de la misma. Los diputados primero y los senadores después, ampliarán las consultas a la sociedad en general y tomarán sus decisiones. Este estilo de trabajo nos permite afirmar que el país podrá contar con una legislación a la altura de los tiempos, capaz de encauzar el desarrollo futuro de nuestra educación superior y de crear bases para mejorar su calidad y su eficiencia. ♠

Informe

El Consejo Nacional de Educación Superior

En el marco de las directrices y objetivos planteados por la Ley Federal de Educación, el Ministerio de Cultura y Educación ha encarado una profunda reorganización interna que incluye la jerarquización de la Educación Superior en general y de la universitaria en particular, a través de la creación de la Secretaría de Políticas Universitarias y el Consejo Nacional de Educación Superior.

A través de la Secretaría de Políticas Universitarias, se impulsa un conjunto de programas operativos que tienen como fin contribuir a la transformación del Sistema Universitario, entre los que se destacan: planificación y evaluación universitaria; reconversión y jerarquización del personal docente; fortalecimiento de la investigación universitaria y vinculación con el medio social y productivo; acreditación y promoción de los posgrados; crédito educativo y programación y gestión presupuestaria.

La tarea por delante es de gran magnitud. Por ello es indispensable establecer bases para el desarrollo a mediano plazo para el Sistema de Educación Superior.

Es imprescindible entonces generar el debate superando las posturas dogmáticas que bloquean e impiden transformar y desarrollar el sistema.

El Estado Nacional tiene la

responsabilidad principal e indelegable de fijar y controlar el cumplimiento de la política educativa. En virtud de ello el Ministerio de Cultura y Educación

"(...) el Poder Ejecutivo Nacional creó el Consejo Nacional de Educación Superior como cuerpo asesor e independiente del Gobierno, con la finalidad de que presente propuestas, sugerencias y principalmente asesore al Ministerio de Cultura y Educación en las materias que hacen a la mejora sistemática de la calidad y la organización del Sistema de Educación Superior".

ha considerado que es imprescindible la apertura de ámbitos creativos y pluralistas, que a partir del análisis serio y riguroso de cada área problemática puedan elaborar y sugerir nuevas ideas y propuestas para la transformación estructural y el desarrollo a mediano y largo plazo de la Educación Superior en el país.

En este marco, el Poder Ejecutivo Nacional creó el Consejo Nacional de Educación Superior como cuerpo asesor e independiente del Gobierno, con la finalidad de que presente propuestas, sugerencias y principalmente asesore al Ministerio de Cultura y Educación en las materias que hacen a la mejora sistemática de la calidad y la organización del Sistema de Educación Superior.

Para cumplir con estos objetivos, se ha invitado a integrar al consejo a personas de reconocida trayectoria pública en áreas académicas, científicas, productivas y tecnológicas e invalorables cualidades humanas y profesionales, quienes han aceptado aportar con plena independencia de criterio sus conocimientos y experiencias en la materia.

El Consejo tiene la facultad de consultar a diferentes sectores y cuenta con todo el apoyo técnico y financiero que demanda a través de la Secretaría de Políticas Universitarias.

Se trata de un hecho más en la sucesión de políticas e iniciativas que día a día el Ministerio de Cultura y Educación está encarando para el desarrollo del sistema educativo. ♠

Labor del Consejo Nacional de Educación Superior

El Consejo Nacional de Educación Superior se constituyó y tuvo su primera reunión plenaria en mayo de 1993. Elaboró su propio plan de trabajo, comenzó a reunirse mensualmente en forma plenaria y, con frecuencia, en comisiones de trabajo.

La Secretaría de Políticas Universitarias está representada en este ámbito por el Lic. Carlos Marqués y cumple las funciones de secretaría técnica.

El Consejo definió como parte de su metodología de trabajo la producción de dictámenes destinados a fijar y a la vez difundir su posición sobre algunos temas centrales de la agenda universitaria.

El Consejo consideró que los temas a los que se abocaría serían -entre otros- los siguientes: **evaluación, acreditación y habilitación, acceso a la educación superior y articulación con la escuela media, análisis de la oferta educativa, ciencia y tecnología; organización y gestión de las instituciones universitarias y el sistema de posgrados.**

Más adelante se presentan los tres primeros dictámenes, que, sin duda alguna, constituyen una invalorable contribución a la tarea de la actual gestión de esta Secretaría y son expresión de la constante labor en busca de **mayores niveles de excelencia y calidad en una universidad mejor para todos. ▲**

Quiénes conforman el Consejo Nacional de Educación Superior

Dr. Máximo Julio Abbate:

Ing. Militar en Química, Lic. y Dr. en Física, egresado del Instituto Balseiro (CNEA - UN de Cuyo). Investigador.

Vicepresidente del Instituto Balseiro. Presidente del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas. Investigador y jefe de grupo de Reactores de Alta Conversión del Centro Atómico de Bariloche. Prof. titular del Instituto Balseiro, Asesor del Área de Investigación y Desarrollo y Gerente de Tecnología del Combustible Nuclear de la CNEA.

Dr. Alberto E. Cassano

Ing. Químico UNL. Doctorado en UCLA (USA). Investigador y profesor titular de la UNL. Profesor titular e Investigador Superior del CONICET.

Miembro de: American Chemical Society, American Institute of Chemical Engineers, Asociación Argentina de Ingenieros Químicos, entre otros.

Ha publicado numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales de la especialidad con arbitraje. Ha presentado numerosos informes técnicos para el proyecto Planta Experimental de Agua Pesada y otros.

Dr. Daniel Chudnovsky

Lic. en Economía Política (UBA). Ph. D. (Dr. en Economía) Universidad de Oxford (Reino Unido).

Se desempeñó en el INTI. Profesor-Investigador de la FLACSO. Economista de la UNCTAD en

Ginebra. En la actualidad es director del CENIT, Prof. regular de Desarrollo Económico en la UBA y consultor de varios organismos internacionales.

Autor de numerosos libros y monografías publicadas en revistas especializadas en la Argentina y en el exterior.

Dr. Carlos A. Floria

Abogado y Dr. en Derecho (UBA). Tesis distinguida con el premio "Facultad".

Miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas; Miembro consultor del Consejo Vaticano "Justicia et Pax"; Investigador en el Centro de Investigaciones Filosóficas y presidente de la Asociación Argentina de Ciencias Políticas. Prof. Titular de Teoría del Estado (UBA).

Prof. Plenario y director del Departamento de Humanidades (Univ. de San Andrés). Editor responsable de la revista "Criterio".

Escribió numerosos artículos y libros.

Dr. José Luis de Imaz

Dr. en Derecho y Cs. Sociales (UBA). Lic. en Cs. Políticas y Diplomáticas de la UNL.

Investigador Superior en Cs. Sociales de la Carrera de Investigador del CONICET.

Desde 1989 hasta 1991 se desempeñó como Director de Asuntos Universitarios en el Ministerio de Educación y Justicia de la Nación.

Actualmente se desempeña como

Es imprescindible generar el debate,
superando las posturas dogmáticas que nos
bloquean y nos impiden transformar y
desarrollar el sistema.

director del Centro de Investigaciones Sociológicas (UCA) y como presidente de la Comisión de Sociología y Demografía del CONICET.

Autor de numerosas publicaciones especializadas y catorce libros.

Prof. Gregorio Klimovsky

Prof. titular de las Universidades Nacionales de Cuyo, Litoral (hoy Rosario), La Plata, Santiago del Estero, Luján, Rio Cuarto y Buenos Aires.

Prof. titular de las Universidades de Belgrano y CAECE.

Se desempeña en diversas cátedras de la UBA y en la Escuela Normal de Profesores "Nicolás Avellaneda" de Rosario, en instituciones privadas, entre ellas, el Instituto Torcuato Di Tella, en la Academia del Sur y en el Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES).

Ha recibido numerosas distinciones por su desempeño como docente e investigador, entre ellas: Premio Roma 1989; Premio Konex 1986; Prof. titular plenario del Dep. de Filosofía de la UBA y del Centro de Altos Estudios en Ciencias Exactas; Socio honorario de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires.

Entre la gran cantidad de actividades que desarrolla, se destaca su trayectoria en el ámbito de los derechos humanos como miembro de la CONADEP y del Consejo de Presidentes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

Ocupa numerosos cargos en

entidades científicas y de investigación.

Es autor de numerosos libros; trabajos epistemológicos, matemáticos y psicológicos y artículos periodísticos en medios de comunicación masivos y revistas especializadas.

Lic. Mario A. J. Mariscotti

Lic. y Dr. en Física (UBA).

Vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Visiting Senior Scientist, Brookhaven National Laboratory N.Y.

Profesor titular UBA.

Director de Investigación y Desarrollo, CENEA

Es autor de numerosas publicaciones científicas originales en revistas nacionales e internacionales.

Conferencista invitado a medio centenar de conferencias internacionales e instituciones extranjeras y otro tanto en el país.

Director de trabajos de tesis.

Autor del libro "El secreto atómico". Premio KONEX 1983.

Prof. Dr. Fernando Martínez Paz

Abogado y Dr. en Derecho y Ciencias Sociales (UNC).

Prof. titular de Introducción al Derecho y de Política Educacional y Organización Escolar (UNC).

Profesor emérito (UNC).

Director académico de la Maestría sobre Políticas y Estrategias en el Posgrado de Estudios Avanzados

(UNC).

Miembro de las comisiones asesoras del CONICET y el CONICOR (Córdoba).

Publicó numerosos artículos y trabajos de investigación.

Autor de numerosos libros.

Actualmente se desempeña como Director del Instituto de Educación de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba.

Dr. Emilio Fermín Mignone

Abogado (UBA), especialista en Derecho Público, Ciencia Política, Política Educativa y Científico-Tecnológica, Historia Latinoamericana Contemporánea y Derechos Humanos.

Dictó cursos, seminarios y conferencias en universidades del país, América Latina, Estados Unidos y Canadá.

En 1944 actuó como Director General de Enseñanza de la Pcia. de Buenos Aires, inaugurando una larga carrera institucional que incluye cargos como el de Subsecretario de Educación de la Nación, rector de la Universidad Nacional de Luján, coordinador de la Comisión Asesora en Ciencias Sociales y Educación del CONICET, consultor del CONADE, del BID y del Banco Mundial.

Actualmente se desempeña, entre otras actividades, como investigador en Política Educativa del Centro de

No hay recetas para cada tópico, empero la peor situación es la de no tener políticas.

Estudios Avanzados (UBA); asesor de Posgrado (UNL); presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales.

Ha escrito numerosos artículos, documentos y monografías

Dr. Martín E. Piñeiro

Ing. Agr. UBA. Master of Science en Agronomía de la Iowa State University y Ph. D. Economía Agraria de la University of California at Davis.

Premio anual de la Asociación Americana de Economía Agraria a las tres mejores tesis de Doctorado. Se desempeñó, entre otras actividades, como Especialista en Economía Agraria del BID, Jefe del Departamento Agropecuario de CONADE, Coordinador de la Escuela para Graduados en Ciencias Agropecuarias, Jefe del Departamento de Economía y Coordinador de Investigación en el INTA. Profesor de la cátedra Política Agrícola en las Universidades de Buenos Aires y La Plata. Subsecretario de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería. Actualmente es el Director General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en San José de Costa Rica. Es Miembro de la Comisión Internacional para la Recuperación y Desarrollo de Centroamérica.

Ha publicado numerosos artículos y libros.

Prof. Juan Carlos Tedesco

Lic. en Ciencias de la Educación (UBA).

En la actualidad se desempeña como Director de la Oficina regional de educación de América Latina y del Caribe (OREALC-UNESCO,

Sgo. de Chile).

Se desempeñó como Director del Centro Regional para la Enseñanza Superior en América Latina y el Caribe (CRESALC- UNESCO, Caracas).

Fue Coordinador del área de Educación y Sociedad de la de la FLACSO, Buenos Aires y Especialista en Estudios y Políticas Educativas del Proyecto UNESCO-CEPAL-PNUD "Educación y Desarrollo en América Latina".

Ha sido Profesor de las Universidades de La Plata, Comahue y La Pampa.

Autor de varios libros sobre educación en Argentina y América Latina, entre ellos: "Educación y sociedad en Argentina", "Conceptos de Sociología de la Educación".

Dra. María Cristina Añón

Dra. en Ciencias Bioquímicas (UNLP).

Fue Becaria en el CONICET y en el King's College de la London University.

Actualmente es Investigador Principal, Miembro Titular de la Junta Técnica de la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo y Vicepresidente de la Comisión Honoraria de Ingeniería Química del CONICET.

Fue Prof. Adjunta Ad-Honorem de Ingeniería de Alimentos Fac. de

Ingeniería UNLP, y es en la actualidad Profesora Titular de Bromatología en la Fac. de Ciencias Exactas, UNLP.

Ocupó el cargo de Secretaria Ejecutiva Honoraria del Programa Nacional de Investigación de Tecnología en Alimentos de la Secretaría de Ciencia y Técnica.

En la actualidad desarrolla actividades como Directora del Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos (CIDCA) dependiente de UNLP, CONICET; Miembro de la Comisión Honoraria de Tecnología e Ingeniería; Coordinadora honoraria del Programa Nacional Prioritario de Alimentos de la Secretaría de Ciencia, entre otras.

Dra. Elena Malvina Rojas Meyer

Dra. en Letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT.

Investigadora Principal del CONICET; Miembro suplente del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT y del Consejo Científico Provincial.

Coordina el proyecto DIES radio TV, dirigido desde el Colegio de México e integra el Proyecto Internacional de Historia del Español de América y el de Estudio Lingüístico y Literario de los Medios de Comunicación Masiva y su Repercusión Social en Tucumán.

Miembro de la Academia Argentina de Letras y del CELCIRP (Paris); ha sido Presidente de la Sociedad Argentina de Lingüística; es catedrática de Historia de la Lengua y Pragmática lingüística; Fundadora, ex-Directora y actual Jefe de la Sección Lingüística del Instituto de Investigaciones

Linguísticas y Literarias Hispanoamericanas (UNT); ha dictado numerosos cursos y conferencias en el país y en el exterior. Es autora de siete libros. Por su obra escrita ha sido reconocida con el otorgamiento de premios nacionales e internacionales entre los que se cuentan: el Primer Premio Nacional de Linguística y Filología, el gran Premio Iberoamericano en Investigación Folklórica, la Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores y la Tercera Mención de Honores en Linguística de la Academia Mexicana de la Lengua.

Dra. Diana Susana Rolandi

Lic. en Antropología y Dra. en Ciencias Naturales (UNLP). Master en Administración Pública (UBA). Ha efectuado numerosos trabajos de investigación antropológica así como de difusión de resultados de los mismos.

Coautora del anteproyecto de Ley de Creación del Programa Nacional de Artesanías Tradicionales, Miembro de la Comisión para formular el Proyecto de Creación del Mercado Nacional de Artesanías Tradicionales, e inaugurándose bajo su dirección el Museo Nacional del Hombre, dependiente del Instituto Nacional de Antropología. Como reconocimiento a su contribución al conocimiento y valoración de las tejedurías tradicionales del noroeste argentino, recibió el premio Rueda de Plata, Rubro Investigación.

Sus trabajos publicados son muy numerosos.

Lic. Emilio Tenti Fanfani

Lic. en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Cuyo y Diplomado en el tercer ciclo de la Fundación Nacional de Ciencias Políticas de París.

Ha desempeñado funciones de Investigación y docencia en universidades de Argentina, Colombia y México.

Profesor titular regular de la Cátedra de Sociología de la

Educación de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Investigador del CONICET y Consultor de UNICEF ARGENTINA. Durante los últimos años ha publicado una serie de títulos y diversas contribuciones en libros y revistas de Ciencias Sociales.

Dr. Juan Carlos Agulla

Abogado de la Universidad Nacional de Córdoba, Dr. en Derecho Universidad Central de Madrid, Doktor der Philosophie de la Universidad de Munich y Doctor en Derecho y Cs. Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue Profesor Titular Ordinario en la Facultad de Derecho y Cs. Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue Profesor invitado en las Universidades de Munster Tubingen y Heidelberg, Alemania; Columbia (Nueva York) y Harvard (Camb. Mass), EE.UU.; Católica de Chile (Santiago), Chile y Laval (Quebec), Canadá.

Actualmente es Profesor titular en la Facultad de Estudios para Graduados de la Universidad de Belgrano; Investigador Superior del CONICET y Director del Instituto de Derecho Público, Ciencia Política y Sociología de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Es Miembro de las Academias Nacionales de Educación, De Ciencias de Buenos Aires y de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba.

Ha publicado más de 30 libros y más de 150 trabajos en obras colectivas y en revistas especializadas de diversos países.

Dr. José Luis Cantini

Abogado y Dr. en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral.

Fue Profesor titular de Legislación en la Universidad Tecnológica Nacional; Profesor de Derecho Civil y Profesor titular de Política y Derecho Educativo en la UCA. Entre otros, ocupó el cargo de Rector en las Universidades Nacionales de

Rosario y El Litoral. Fue Ministro de Educación de la Nación entre 1970 y 1971.

Dr. Juan Carlos Pugliese

Abogado (UNLP).

Fue profesor Adjunto de Geopolítica y Geografía Política en la Facultad de Humanidades en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y Profesor a cargo del curso de ingreso de la misma Universidad. En la actualidad es Profesor Asociado de Política Educativa en la mencionada Universidad.

Fue Rector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de la Provincia de Buenos Aires; ha sido Presidente, en Mayo de 1987 y ha desempeñado otros cargos en el Consejo Interuniversitario Nacional; y es actualmente Miembro de la Comisión de Educación del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. ♣

Propiciar la
apertura de
ámbitos
creativos y
pluralistas
que a partir
de un análisis
serio y
riguroso,
puedan
elaborar y
sugerir
nuevas ideas
y propuestas

Dictámenes

del Consejo

Nacional

de

Educación

Superior

Desde su creación, el Consejo Nacional de Educación Superior produjo tres dictámenes.

PRIMER DICTAMEN *Evaluación de la Calidad de la Educación Superior*

En noviembre de 1993 el Consejo Nacional de Educación Superior acordó por unanimidad su primer dictamen. En el mismo, los miembros se pronunciaron acerca de la evaluación de la calidad de la Educación Superior, luego de una prolongada consideración que incluyó el análisis de antecedentes nacionales y extranjeros y de la copiosa bibliografía sobre el tema. Así, en el primer documento se exponen las siguientes conclusiones:

1. Calidad de la Educación Superior: Involucra la adecuada satisfacción de los siguientes atributos: **excelencia, pertinencia, eficiencia y equidad.** No cabe duda que su mejoramiento debe constituirse en un objetivo esencial de las políticas educativas públicas, de la actividad de las instituciones de dicho nivel y de las asociaciones que las agrupan. Tal propósito, que es inherente a la tradición universitaria, tanto universal como nacional, se presenta en la actualidad, como un imperativo indispensable en virtud de diversas circunstancias convergentes. Pueden mencionarse entre ellas el aumento y la precisión de las demandas sociales; el

incremento acelerado del número de establecimientos, tanto estatales como privados y de la matrícula estudiantil; las exigencias de competitividad en un contexto internacional crecientemente intercomunicado y en un escenario económico donde los conocimientos científicos, la creatividad y la innovación tecnológica juegan un papel decisivo; y, finalmente, la necesidad de lograr una utilización más racional de los recursos comunitarios.

2. Evaluación de la Calidad:

Una estrategia global del mejoramiento de la calidad de la Educación Superior requiere, entre otros instrumentos, la evaluación de las instituciones, sus programas, actividades y carreras. Existe en este sentido, una valiosa práctica universal que se extiende y se perfecciona en forma constante y que ofrece experiencias y modelos variados de aplicación, presentados y debatidos en forma permanente en congresos y reuniones internacionales. Se advierte igualmente en diversos sectores de la sociedad argentina y de manera particular en la comunidad universitaria, un notorio interés por el empleo de la evaluación sistemática de la calidad.

En todos los casos, la evaluación se presenta como una contrapartida inexcusable de las políticas de descentralización y de mayor autonomía de las instituciones de Educación Superior que en la mayoría de los

países tiende a incrementarse. Como en todos los aspectos de la vida, a una mayor libertad corresponde una creciente responsabilidad. Dentro de ese orden de ideas, la autonomía, que es el recaudo indispensable para la libertad académica y la creatividad científica y artística, obliga como legítima compensación, a una periódica rendición de cuentas ante la sociedad. La evaluación, finalmente, sirve de orientación ante la gran variedad de instituciones y programas a la vista de potenciales estudiantes, familias, empleadores, y amantes del saber y las artes. Teniendo en cuenta el sistema argentino de formación superior, extraordinariamente extendido en los últimos años y con perspectivas de una creciente expansión y diversificación, resulta aconsejable, a juicio de este Consejo Nacional, la **sistematización de procedimientos de evaluación que contribuyan de manera eficaz al mejoramiento de la calidad de la educación.**

Esta recomendación es oportuna por cuanto se encuentran a consideración del Congreso Nacional y en estudio en el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, numerosos proyectos y anteproyectos de leyes universitarias o de educación superior, cuyo tratamiento es previsible en el curso de 1994. La legislación proyectada tendrá que incluir de manera indispensable pautas dirigidas a garantizar y mejorar la calidad de la Educación Superior a través, entre otros medios, de un sistema de evaluación cuyos lineamientos se pasan a detallar.

3. Objetivos:

Contribuir a la elaboración de planes estratégicos, propuestas de reformas y de reestructuración por parte de las instituciones, unidades y programas evaluados; y al esclarecimiento de las decisiones de estudiantes y otros usuarios del

sistema educativo.

4. Características de la evaluación:

El sistema de evaluación que se establezca debe poseer las siguientes modalidades:

a) Contexto:

La evaluación exige tener en cuenta los objetivos del sistema educativo nacional y los propios de cada institución, sector, unidad o programa evaluado, en función de sus orígenes, medios, desarrollo y del entorno geográfico, político, socio-económico y cultural.

b) Independencia y Autonomía:

Los entes de evaluación, cuando sean ajenos a la institución, deben ser autónomos e independientes, de conformidad con lo estipulado en este documento.

c) Transparencia y Objetividad:

Los procedimientos de evaluación deben ser transparentes, contar con la participación de los actores involucrados y con retroalimentación. Deben asegurar la utilización de metodologías científicas y objetivas, y la elección de evaluadores y expertos de reconocida capacidad, preparación e independencia.

d) Periodicidad:

La tarea de evaluación deberá ser permanente, en cada una de sus dimensiones (institución, sector, unidad o programa) y ser ejecutada con una periodicidad prefijada.

e) Publicidad:

Para el mejor cumplimiento de los objetivos los informes del proceso de evaluación deberán ser públicos.

f) Formalización:

El sistema propuesto deberá integrar el articulado de una ley específica de Educación Superior o universitaria prevista por los artículos 24/26 de la Ley Federal de Educación N° 24.195.

5. Ámbito de la evaluación:

En cuanto al ámbito de la evaluación, este Consejo Nacional considera que la misma debe abarcar la totalidad del sistema formal de Educación Superior, incluyendo los establecimientos públicos (nacionales, provinciales y dependientes de organismos o entes estatales) y los privados. Sólo quedaría excluida la educación no formal.

Será razonable comenzar por el subsistema universitario, dada la particular situación en que se encuentra la educación terciaria no universitaria cuya supervisión y financiamiento corresponde a las provincias. Esto exige, por lo tanto, la participación o el acuerdo del Consejo Federal de Educación.

La evaluación debe ser institucional (incluyendo docencia, investigación y extensión; gestión, vinculación con el medio, servicios, bienestar estudiantil, etc.); aunque puede focalizarse inicialmente en algunos de los niveles (ingreso, grado o posgrado), abarcar unidades parciales (facultades, departamentos, institutos, oficinas administrativas); o sectores (docencia, investigación, extensión, gestión y vinculación con el

**"A una mayor
libertad
corresponde una
creciente
responsabilidad."**

"(...) De la independencia, objetividad, y sobre todo, de la credibilidad, confiabilidad y prestigio del órgano evaluador y de los científicos y expertos que participan en el ejercicio depende -en gran medida- la eficacia, gravitación y utilidad de la evaluación."

medio, servicios, bienestar estudiantil, etc.); y programas o carreras, según la estrategia adoptada.

6. Etapas de la evaluación:

De acuerdo con la experiencia universal, la evaluación debe comprender dos etapas: una, de autoevaluación a cargo del establecimiento, unidad, sector o programa evaluado, con la participación de todos los actores involucrados (directivos, docentes, investigadores, personal administrativo, técnico y de servicio, estudiantes, egresados y eventualmente empleadores y corporaciones profesionales de la región). Y otra, consistente en una evaluación externa, efectuada por un equipo de pares académicos y de especialistas en gestión, vinculación con el medio, servicios, bienestar estudiantil, etc, seleccionados entre personas de reconocida excelencia y probidad y, por cierto, ajenos al establecimiento evaluado. **No existe, a juicio de este Consejo Nacional, una evaluación válida y confiable si no incluye una etapa de carácter externo.** Convendrá además que en ambos ejercicios intervengan, como asesores, expertos en evaluación.

7. Metodología de la evaluación:

No corresponde en el marco del presente dictamen extenderse respecto a la metodología para la evaluación. Se trata de una materia fundamentalmente técnica, en permanente cambio, debate y

perfeccionamiento y acerca de la cual existe copiosa bibliografía. A juicio de este Consejo Nacional, la metodología debe incluir tanto indicadores cuantitativos (para lo cual debe partirse de un adecuado sistema de información) como cualitativos. Habrá que tener en cuenta igualmente la apreciación simultánea de los insumos, procesos y productos.

8. Administración del proceso de evaluación:

El interrogante más importante que ofrece esta materia que da lugar a las principales dificultades, reservas y desconfianzas es el de quién evalúa. O con mayor precisión, a cargo de quién se encuentra la elección de los evaluadores externos, la coordinación del proceso, la redacción y difusión del informe evaluativo. Se trata de una cuestión realmente significativa por cuanto de la independencia, objetividad, y sobre todo, **de la credibilidad, confiabilidad y prestigio del órgano evaluador y de los científicos y expertos que participan en el ejercicio depende -en gran medida- la eficacia, gravitación y utilidad de la evaluación.**

Como es sabido, la credibilidad, confiabilidad y prestigio otorgados por la sociedad -y en este caso fundamentalmente por la comunidad universitaria- son atributos que no se alcanzan a través de una mera afirmación pública, por un acto de voluntad del poder administrativo y político o mediante

una disposición legal. Hay que ganarlos y sólo el transcurso del tiempo permite alcanzar, generalmente, la conformidad social y académica. De cualquier manera, como en algún momento se requiere dar nacimiento al sistema evaluativo, y determinar a quién o a quiénes corresponde dicha competencia, se impone rodear al mismo de los mayores recaudos en el marco de la historia, la tradición académica, las instituciones políticas y la cultura social de cada país.

Dentro de ese orden de ideas, **el juicio de los pares académicos constituye un método universal** que, como todos los procedimientos humanos, posee limitaciones y deficiencias pero es el que ofrece mayores garantías y resulta por ello aconsejable. Entre nosotros es aceptado sin demasiados conflictos en el campo de la investigación científica y tecnológica y puede ser por lo tanto razonablemente aplicado para la evaluación de la Educación Superior.

A juicio de este Consejo y de acuerdo con las consideraciones precedentes es aconsejable que la administración del sistema de evaluación se encuentre a cargo de un Consejo Nacional de Evaluación de la Educación Superior de carácter autónomo, integrado por once personas de

"El propósito del proceso de acreditación consiste en proporcionar una evaluación profesional aceptable de las instituciones, unidades, carreras o programas educativos y estimular su constante mejoramiento."

reconocido prestigio en el campo académico y de la gestión de la educación pública o privada. Las mismas serían designadas por el Poder Ejecutivo Nacional sobre la base de ternas propuestas por las instituciones y en las proporciones que siguen; las designaciones no implicarían representación institucional.

Consejo Interuniversitario Nacional (CIN): 4; Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP) - en proporción a la matrícula estudiantil- 1; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET): 1; Ministerio de Cultura y Educación: 1; Cámara de Diputados de la Nación: 1; Cámara de Senadores de la Nación: 1; Consejo Federal de Educación: 2.

El Consejo deberá contar con un Presupuesto propio. El Poder Ejecutivo deberá facilitar su tarea otorgándole un ámbito e infraestructura de trabajo acorde con sus funciones. La norma de creación del Consejo debe facultarlo a recabar toda la información que sea necesaria para el cumplimiento de sus fines.

**SEGUNDO DICTAMEN:
Acreditación de las Carreras e Instituciones Universitarias.**

En su segundo dictamen, el Consejo Nacional de Educación Superior se pronuncia acerca de la **Acreditación de las Carreras e Instituciones Universitarias.**

En cuanto al concepto de

acreditación, el Consejo entiende que es "(...) el proceso a través del cual una agencia gubernamental o una asociación legalmente responsable otorga reconocimiento público a una escuela, instituto, colegio, universidad o programa especializado (facultad, departamento, carrera, curso de grado o de posgrado, área disciplinaria, etc), garantizando que reúne determinados estándares educativos y calificaciones previamente establecidas. La acreditación es siempre el resultado de una evaluación inicial, seguida de otras periódicas, destinadas a verificar el mantenimiento o mejora de la calidad previamente analizada. El propósito del proceso de acreditación consiste en proporcionar una evaluación profesional aceptable de las instituciones, unidades, carreras o programas educativos y estimular su constante mejoramiento."

El Consejo, luego de hacer un análisis del origen y evolución histórica del sistema de acreditación y de su posible aplicación en nuestro país, hace la siguiente propuesta:

a) Es conveniente que la próxima Ley de Educación Superior establezca las condiciones para la organización paulatina de un sistema de acreditación de los establecimientos, unidades,

programas o carreras del nivel de grado.

En este caso el órgano natural deberá ser la Comisión o Consejo Nacional de Evaluación (...) a tal fin, dicho cuerpo debería denominarse Comisión o Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación.

b) Lo anterior no impediría la formación en el país de asociaciones voluntarias de acreditación, cuyo funcionamiento tendría, sin embargo, que poseer el reconocimiento por parte del citado Consejo o Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación, a fin de garantizar su idoneidad, independencia y objetividad.

c) Si bien es cierto que la acreditación del nivel de grado de la Educación Superior requiere una aplicación paulatina, este Consejo Nacional considera indispensable la organización inmediata, a cargo del mismo Consejo o Comisión, de **un sistema de acreditación sujeto a una evaluación inicial y periódica, de los posgrados universitarios y no universitarios.**

A ello tendrían que sumarse programas correlativos por parte del Estado de apoyo técnico y financiero y, sobre todo, de becas de estudio y de estímulo a la docencia y la investigación. La recomendación precedente surge del análisis -resultante de los documentos de trabajo examinados, de diversas publicaciones y de la experiencia directa de los miembros del cuerpo- de la problemática situación creada en el país por la

afloración de innúmeros cursos de posgrado, incluso con el ofrecimiento de títulos de especialización, maestría y doctorado. Su calidad y pertinencia ofrece, por cierto, muchas dudas, con el agregado de que no están evaluados ni garantizados por órgano responsable alguno.

TERCER DICTAMEN:

Anteproyecto de Ley del Sistema de Educación Superior.

En su tercer dictamen, del 8 de Abril de 1994, el Consejo Nacional de Educación Superior se pronunció acerca del **Anteproyecto de Ley del Sistema de Educación Superior.**

Los miembros del Consejo, en sus consideraciones, expresan que parece oportuno:

1. (...) elaborar un proyecto de "ley marco" que abarque la totalidad del Sistema de Educación Superior y modifique el criterio que escinde el "nivel universitario" del "terciario no universitario" permitirá la mejor articulación de los niveles y la fluidez del pasaje de uno a otro. Esta presentación temática satisface los principios del Anteproyecto, y se encuentra en consonancia con el articulado de la Ley Federal de Educación.

2. (...) **legislar en una sola norma todo el sistema universitario englobando a las universidades de gestión oficial nacional, con las de gestión privada o provincial.** Esto unificará en un "corpus" lo hasta ahora disgregado en tres leyes distintas. La conveniencia no radica exclusivamente en la economía legislativa, sino en hacer coincidir a todas las universidades en el cumplimiento de los mismos fines.

3. (...) la creación de Institutos Universitarios con finalidades específicas, centrados en un área disciplinaria (...) podrán así satisfacer mejor sus objetivos institucionales (...)

4. Iniciar el anteproyecto identificando los fines de la Universidad, porque (...) justifica y da razón a todos los demás aspectos organizacionales.

5. (...) la evaluación integral del quehacer universitario antecedida de una autoevaluación y seguida de una evaluación externa, según el procedimiento consignado en el texto y oportunamente aconsejado por este Consejo.

6. Que el cuerpo de profesores asuma la responsabilidad principal en el gobierno de la institución sin perjuicio de la participación de otros estamentos.

7. La coordinación de todo el sistema universitario - universidades públicas y universidades privadas - a través del Consejo previsto (...)

Por otra parte, el Consejo Nacional de Educación Superior considera necesario aclarar que:

1. (...) la figura jurídica de Colegio Universitario citada en el texto - como lógica consecuencia de su reiteración en la Ley Federal de Educación - no ha tenido curso legal en nuestro medio por lo que corresponde hacerlo con mayor detenimiento.

2. Cabría la posibilidad de identificar con mayor precisión las funciones de los Institutos Universitarios (...)

3. Según la Constitución Nacional sólo las provincias son autónomas. La autonomía de las universidades es exclusivamente académica. Las Universidades, desde el punto de vista de la provisión de fondos, rendición de cuentas, auditoría y control de gestión, son entes autárquicos. Sobre esto están contestes - desde Rafael Bielsa en adelante - todos los tratadistas de Derecho Administrativo. Desde el punto de vista de la "legalidad de sus actos", los entes autárquicos quedan supeditados a la revisión por una instancia administrativa superior. El presente anteproyecto permite que en lo concerniente a la revisión de sus actos, las Universidades "salteen" toda

instancia administrativa, recurriendo de inmediato a la justicia. Es muy posible que la redacción de la norma obedezca a un juicio prudencial. Si es buena para la convivencia, y facilita la eficacia, bienvenido sea este "estiramiento" de la norma. (1)

4. Este Consejo entiende que, en las carreras que comprometen de modo directo la salud, la seguridad, los derechos o los bienes de los habitantes, es conveniente distinguir entre el diploma universitario y la habilitación profesional.

5. Si bien el presente anteproyecto prevé que la acreditación de nuevas Universidades, Facultades, etc. es específica para cada caso, este Consejo considera que de su conjunto surgirá un marco normativo y un proceso indispensable de planeamiento del desarrollo de la educación superior, que deberá llevar a cabo el organismo previsto por la ley proyectada. Lo mismo cabe decir de los posgrados. ♣

"Desde el punto de vista de la legalidad de sus actos, los entes autárquicos quedan supeditados a la revisión por una instancia administrativa superior"

Evaluación y Acreditación en el proyecto de Ley de Educación Superior

Por Emilio F. Mignone

La iniciativa del proyecto de ley en cuestión en materia de evaluación y acreditación tiene numerosos antecedentes en la legislación y la práctica internacional comparada.

Entre sus características positivas se destaca el hecho que comprende tanto la autoevaluación como la evaluación externa, partiendo del principio correcto que ambos procedimientos son indispensables y complementarios. Abarca también en un plano de igualdad, tanto a las universidades públicas como a las privadas. A ello se agrega la transparencia de los procedimientos y la participación en la propuesta de los integrantes del órgano proyectado -la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación- de los distintos sectores involucrados, en especial la comunidad universitaria. Los recaudos establecidos garantizan la objetividad, la independencia y el rigor académico de ese cuerpo y otorgan una cómoda mayoría en el mismo a los miembros indicados por las universidades.

Un aspecto que singulariza al sistema proyectado es que combina los modelos conocidos y otorga libertad de opción a las universidades para elegir, con vistas a su evaluación institucional y del

Algunos
comentarios
sobre la
temática de la
evaluación y la
acreditación en
el proyecto de
ley de
educación
superior
remitido al
Congreso por
el Poder
Ejecutivo
Nacional.

ciclo de grado (con la excepción a la cual me referiré enseguida), a las asociaciones privadas voluntarias o al citado Consejo Nacional de Evaluación, según lo prefieran.

Es verdad que las asociaciones privadas voluntarias requieren el reconocimiento y la convalidación de sus estándares por parte del citado Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación. Pero esta norma es universal, incluso en los Estados Unidos, donde a pesar de la tradición centenaria y del prestigio y confiabilidad de dichas organizaciones, éstas necesitan para actuar - como consecuencia de la Higher Education Act, de 1965 y de la Education Amendments or Public Law 102-125, del 23 de julio de 1992, sancionadas por el Congreso Federal - la autorización de la Secretaría de Educación Federal, previo un dictamen del Comité Asesor Nacional sobre Acreditación.

Como es una práctica universal - y a veces se omite decirlo -, el proyecto de ley analizado establece que la evaluación estará a cargo de pares académicos y científicos reconocidos. Aunque lógicamente, al igual que en todos los sistemas conocidos, la administración del proceso de evaluación y su correlato

**"Coincido con el
criterio del
proyecto de ley
en cuestión en el
sentido de
establecer la
evaluación y
acreditación
obligatoria de las
carreras que
comprometan el
interés público
poniendo en
riesgo la salud, la
seguridad, los
derechos y los
bienes de los
habitantes."**

- cuando existe - la acreditación, será llevada a cabo - según la opción que efectúe la universidad -por un órgano estatal autónomo o por la comisión directiva de una asociación voluntaria, con el apoyo indispensable de un equipo técnico.

Coincido con el criterio del proyecto de ley en cuestión en el sentido de establecer la evaluación y acreditación obligatoria de las carreras que comprometan el interés público poniendo en riesgo la salud, la seguridad, los derechos y los bienes de los habitantes. Se trata, por cierto, de una facultad indelegable, universal y tradicional del Estado. No existe, además, otra alternativa al no ser aceptada por la mayoría de las universidades (no todas) el criterio de la distinción entre título académico y habilitación profesional, que existe en los países donde predomina, como legítimamente se aspira entre nosotros, la máxima autonomía universitaria.

Lo mismo cabe decir de la obligación de la evaluación periódica y la acreditación de los posgrados, decisión que considero indispensable y acertada. Fue además aconsejada por el Consejo

Nacional de Educación Superior, que integro. En su dictamen del 8 de abril de 1994 dicho organismo señaló que su recomendación surge "del análisis de los documentos de trabajo examinados, de diversas publicaciones y de la experiencia directa de los miembros del cuerpo; y de la problemática situación creada en el país por la afloración de inúmeros cursos de posgrado, incluso con el ofrecimiento de títulos de especialización, maestría y doctorado. Su calidad y pertinencia -concluye- ofrece en muchos casos fundadas dudas".

Podría sugerirse, finalmente, una disminución del número de miembros del Consejo Nacional de Educación Superior para evitar su burocratización, pero esta posición disminuye las ventajas del contralor y la diversidad derivados del distinto origen de sus miembros. Más aún: creo que sería útil pensar en su ampliación - como ocurre en otros países - con la incorporación de representantes de los sectores sociales, económicos y profesionales no ligados directamente con la universidad. ♣

Informe

Seminario Internacional Evaluación y Acreditación Universitaria

El encuentro tuvo amplia acogida en la comunidad universitaria nacional. Asistieron al mismo renombrados especialistas que desarrollaron la problemática de la evaluación y la acreditación en contextos de intercambio regional (NAFTA, MERCOSUR, COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA) y también diferentes experiencias a nivel nacional (Chile, Brasil, Argentina, Paraguay).

En el acto de apertura, el **Ministro Jorge Rodríguez** destacó que, *"en nuestro país y en el mundo se está viviendo un proceso de profunda transformación: se está avanzando en la etapa de concientización en América del Sur, empezando por agrupamientos regionales como el Mercosur"*.

"Esto representa un gran desafío para los modelos educativos que impulsamos, agregó. Por eso pretendemos diseñar programas que mejoren la excelencia, la calidad de la educación, y que logren interrelacionar a nuestros profesionales."

El Seminario contó también con la presencia de rectores de varias Universidades Nacionales y Privadas y una numerosa audiencia que participó de la discusión y el debate en el más alto nivel.

Se encontraron entre los expositores: Liz Reisberg (USA),

Del 15 al 17 de Junio tuvo lugar en el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación el **Seminario Internacional de Evaluación y Acreditación Universitaria en los procesos de Integración Regional**, organizado por la Secretaría de Políticas Universitarias que estuvo coordinado por el Lic. Carlos Marquis.

Sylvia Ortega Salazar (Mexico), y Marta Anadón (Arg., de la Universidad de Quebec), por el NAFTA; Angel Altisent (España), por la Comunidad Económica Europea; José Joaquín Brunner y Ma. José Lemaitre del Campo (Chile); Jorge Landinelli y Enrique Martínez Larrechea (Uruguay) Eunice Ribeiro Durham, Ma. José Vieira Ferés y Fernando Spagnolo (Brasil); Luis H. Berganza y Hugo Lopez (Paraguay); Pedro Lafourcade, Carlos Marquis, Emilio Mignone, Augusto Perez Lindo y Eduardo Mundet (Argentina), por el Mercosur.

E. Mignone, (Miembro del Consejo Nacional de Educación Superior) destacó que "(...) el tema de la evaluación, acreditación y habilitación profesional ocupa hoy en día un espacio cada vez mayor en todo el mundo, al contrario de lo que muchos suelen decir". "No se trata de una moda circunstancial - agregó- sino que se debe a necesidades concretas como lo fue el proceso de unificación europea, que requirió decisiones por parte de los Estados para no renunciar a la meta de tener proyectos más allá de lo meramente nacional".

Acerca de la experiencia en la CEE, habló el Lic. **Angel Altisent** (Consejero de Educación de la Embajada de España), que enfatizó la importancia que tuvo, en el proceso europeo de integración

continental, el haber generado mecanismos "para, por un lado, garantizar la posibilidad de los ciudadanos profesionales de los países miembros de movilizarse por todo el territorio de la comunidad, y tener el derecho al ejercicio de su profesión y, por otra parte, mecanismos y derechos de los países de exigir condiciones para que los ciudadanos de otro estado miembro ejerzan una profesión regulada (toda actividad o conjunto de actividad para cuyo ejercicio en la CEE se requiera de un título específico)".

El **Dr. Brunner**, afirmó que "en América Latina existe un problema común que es la conducción y coordinación de los sistemas de educación superior que se han vuelto extremadamente complejos". "Efectivamente -agregó- un día u otro, gran parte de los países debe enfrentar este problema".

"Lo difícil -puntualizó- es que en América Latina se han adoptado modelos de coordinación de los Sistemas de Educación Superior que toman elementos de otros países y los combinan de una manera especial, de forma tal que se llegó a una situación en la que en realidad ni el gobierno, ni las propias universidades, ni el mercado, tienen la solución a este bloqueo que se ha producido para lograr la coordinación de los Sistemas Educativos Superiores".

"Una de las cosas que deben modificarse a este respecto, es desbloquear el financiamiento. Este debe dejar de ser algo automático, y pasar a ser sensible al funcionamiento real de las instituciones."

La **Dra. Ortega Salazar** (Ex rectora UAM-A) describió las características del proceso de Evaluación y Acreditación en México e hizo hincapié en la importancia de que "a partir de 1989, en México se haya dado por primera vez una política educativa sensible a las tendencias internacionales pero que no sólo tiene que ver con ellas" dado que "hoy en día, la importancia de la evaluación no se discute: el tema es cómo realizarla".

Por su parte, la **Dra. Anadón** (Ph.D Universidad del Quebec, Prof. Titular de la Universidad del Quebec en grado y posgrado), describió la situación canadiense, especificando las características de la evaluación de instituciones, programas, docencia e investigación. La Lic. Anadón, habló de las Comisiones de Evaluación y Acreditación que permiten la acreditación para el otorgamiento de los títulos y recalcó la "importancia de la evaluación continua que realizan las Universidades y que garantiza al Estado un control de los fondos públicos." ♠

Dr. David Woodhouse en Argentina

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

En Mayo de 1994 la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Cultura y Educación, invitó al Dr. David Woodhouse a dar una **conferencia pública acerca de "Experiencias internacionales sobre garantía y evaluación de la calidad de la Educación Superior: Acreditación y Habilitación Profesional"**.

El Dr. Woodhouse tiene una larga trayectoria en la docencia, la investigación y la administración y particularmente en el diseño y perfeccionamiento de políticas educativas en Australia, África, Hong Kong, y actualmente Nueva Zelandia.

En los últimos años, ha concentrado su atención en la calidad de la Educación Superior y en la forma de garantizarla a través de la evaluación, la acreditación y la habilitación profesional, desempeñándose como: Director Ejecutivo Asociado del Consejo de Acreditación Académica de Hong Kong, Director Ejecutivo Asociado de la Red Internacional de Agencias de Evaluación de la Calidad, editor de un boletín con información internacional sobre dicha materia, titulado QA (Quality Assurance). Tuvo un papel descollante en la Conferencia Mundial sobre Evaluación y Acreditación de la Educación Superior que se desarrolló en Montréal, Canadá, en Mayo de 1993. A partir de 1994, contratado por el gobierno de Nueva Zelandia, está organizando y dirigiendo la Unidad de Evaluación y Acreditación de ese país.

En la conferencia, que ofreció en el Palacio Pizzurno, el Dr. Woodhouse destacó la importancia que la evaluación de la calidad educativa tiene en estos momentos no sólo en la Argentina sino como tendencia en todo el mundo.

Por otra parte, se refirió a las políticas para la garantía y el mejoramiento de la calidad de la Educación Superior que desarrollan diversos países, comparó diversas experiencias y contestó preguntas acerca de la implementación de estas estrategias en nuestro país.

Consejos de Planificación Universitaria

Al crearse la Secretaría de Políticas Universitarias uno de sus objetivos fundamentales fue conducir la elaboración de planes y políticas referidas al desarrollo universitario.

La importancia del objetivo a alcanzar reside en la necesidad de contar con instancias de articulación conjunta entre las Universidades, el Estado Nacional, los Estados Provinciales y los demás sectores que integran el conjunto social. Por esto se crearon los Consejos de Planificación Universitaria Regional, como ámbitos de encuentro intersectorial y de apoyo al desarrollo coordinado del Sistema Universitario.

Los Consejos de Planificación Universitaria Regional, actúan como órganos de asesoramiento y están integrados por los gobiernos provinciales y las universidades nacionales, provinciales y privadas, en calidad de miembros permanentes, además de la Secretaría de Políticas Universitarias.

La constitución de los Consejos Regionales permite obtener e intercambiar un conocimiento directo de la evolución y situación en que se encuentran los

distintos sectores productivos, al igual que sus planes de desarrollo y requerimientos en materia de recursos humanos calificados y desarrollo científico-tecnológico.

Asimismo permiten generar una visión regional de toda la oferta de estudios, carreras y servicios, dando lugar a que las universidades no se posicionen entre sí como competidoras sino como entes complementarios.

Son siete y comprenden las siguientes regiones: Metropolitana, Bonaerense, Centro-Este, Noroeste, Noreste, Cuyo y Sur.

La conformación de las Regiones está integrada por las siguientes instituciones:

Región Metropolitana: Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de General San Martín, Universidad Nacional de General Sarmiento, Universidad Nacional de la Matanza, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Universidad Nacional de Luján, Universidad Nacional de Quilmes, Universidad Tecnológica Nacional y cinco representantes de universidades

Los Consejos de Planificación Universitaria Regional, actúan como órganos de asesoramiento y están integrados por los gobiernos provinciales y las universidades nacionales, provinciales y privadas, en calidad de miembros permanentes, además de la Secretaría de Políticas Universitarias.

Son siete los
Consejos
Regionales,
comprendiendo
las siguientes
regiones:
Metropolitana,
Bonaerense,
Centro-Este,
Noroeste,
Noreste, Cuyo
y Sur.

de iniciativa privada de la región, propuestos bianualmente por el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP).

Región Bonaerense:

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional del Sur, Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Católica de La Plata, Universidad Notarial Argentina, Universidad de las Fraternidades y Agrupaciones de Santo Tomás de Aquino y Escuela Universitaria de Teología.

Región Centro - Este:

Gobiernos de las Provincias de Entre Ríos y Santa Fe, Universidad Nacional de Entre Ríos, Universidad Nacional de Rosario, Universidad Nacional del Litoral, Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Católica de Santa Fe, Universidad de Concepción del Uruguay, Universidad Adventista del Plata.

Región Noreste :

Gobiernos de las Provincias de: Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. Universidades

Nacionales de Formosa, Misiones, Nordeste y Universidad Tecnológica.

Región Noroeste:

Gobiernos Provinciales de : Córdoba, Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Universidades Nacionales de Córdoba, Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. La Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Católica

de Salta, Universidad Católica de Santiago del Estero, Universidad del Norte "Santo Tomás de Aquino", Universidad Blas Pascal y Universidad Católica de Córdoba.

Región Cuyo :

Gobiernos provinciales de : La Rioja, Mendoza, San Luis, San Juan, Córdoba. Universidades Nacionales de Cuyo, Río Cuarto, San Juan, San Luis y La Rioja. Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Católica de Cuyo, Universidad Champagnat, Universidad de Mendoza, Universidad del Aconcagua, Universidad "Juan Agustín Maza".

Región Sur:

Gobiernos provinciales de : Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Universidad Federal de la Patagonia Austral, Universidad Tecnológica Nacional y las Universidades Nacionales de La Pampa, Comahue y de la Patagonia "San Juan Bosco". ♣

Novedades UniversitariaS

INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DE NIVEL SUPERIOR.

Se inauguró en Mendoza el Instituto Tecnológico Universitario en junio del corriente año. A tales fines viajaron a la ciudad de Mendoza por la cartera educativa, el titular del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, Ing. Agr. Jorge Rodríguez y el Secretario de Políticas Universitarias, Lic. Juan Carlos Del Bello.

Este instituto se creó en base a un acuerdo por el que se desarrolló un programa conjunto, con el aporte de organismos nacionales, internacionales y privados.

El acuerdo se realizó entre el gobierno de la provincia de Mendoza y la Universidad Nacional de Cuyo, impulsores de esta iniciativa; el Ministerio de Trabajo, como responsable de la formación profesional para el mercado de trabajo, y el Ministerio de Cultura y Educación, en su carácter de máxima autoridad de aplicación de la Ley Federal de Educación.

De ésta forma se cumple con otros de los ítems previstos en la Ley Federal de Educación que expresa que la etapa profesional de grado no universitario se cumplirá en institutos de Educación Técnica. La formación técnica postsecundaria deberá posibilitar la formación profesional y reconversión permanente en las diferentes áreas del saber técnico y práctico que demandara la estructura productiva y ocupacional del país. Un claro déficit en la formación técnica no

universitaria se ha venido manifestado hasta ahora en la experiencia argentina. En la última década, experiencias internacionales indican un incremento de las alternativas de educación postsecundaria articuladas con la formación universitaria. De esta manera, quienes luego de la formación técnica adquirida quieran continuar estudios universitarios, podrán hacerlo con pleno reconocimiento de materias y equivalencias. Asimismo, mediante dicha articulación se procura garantizar mayores niveles de calidad y excelencia.

Instalaciones Para la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Quilmes

En Marzo de 1994, se realizó, luego de diversas gestiones, el acto de cesión de instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales a la Universidad Nacional de La Plata.

Se trata de instalaciones en las que Y.P.F tenía ubicados sus laboratorios, en la localidad de Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires.

Convenio mediante, hará uso de las instalaciones la Universidad Nacional de Quilmes. Cabe destacar que ambas Universidades Nacionales gestionaron -con la mediación de la Secretaría de Políticas Universitarias- ante autoridades públicas nacionales, provinciales y municipales, y ante legisladores y funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales a los fines de lograr la autorización para ocupar las instalaciones, con el objetivo común de utilizar las mismas para fines de investigación y docencia.

AFACIMERA SE PRONUNCIA CON RELACION A LA EMISION DE TITULOS Y HABILITACION PROFESIONAL

En una nota del titular de la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas de la República Argentina (AFACIMERA), Dr. Carlos R. Fernández, se dió a conocer la opinión de este organismo en lo que respecta a la emisión de títulos y habilitación profesional. La misma consta de cuatro puntos:

"1- Determinación de perfil y alcances determinados por las facultades en sus programas y las incumbencias profesionales acordadas entre AFACIMERA y los Ministerios de Educación y Salud.

2- Exigencia de condiciones o pruebas para el ingreso a la carrera y reglamentación sobre permanencia del estudiante en la facultad (años, números de aplazo, etc.).

3- Prácticas obligatorias de pregrado, una vez terminadas de cursar y aprobar todas las asignaturas de la carrera. Las prácticas deberán ser de por lo menos un año poniendo énfasis en atención primaria, especialidades médicas básicas (pediatría, gineco-obstetricia, clínica médica, cirugía, salud pública y salud mental) y emergencias.

Las mismas, deberán realizarse en hospitales y centros de atención primaria y se exigirá al menos una guardia semanal en servicios de guardia permanente.

Las prácticas de estos años se llevarán a cabo en servicios acreditados, bajo supervisión docente y con evaluación a cargo de las Facultades.

Se pondrá énfasis en la adquisición, por parte del alumno, de habilidades y destrezas y la capacitación para resolver situaciones habituales de la práctica médica.

4- Las facultades deberán someterse a procesos de autoevaluación a cargo de comisiones internas, y de evaluación externa con intervención de evaluadores designados por las facultades y el Ministerio de Cultura y Educación.

Las evaluaciones serán periódicas y cumplirán con los requerimientos acordados con las comisiones evaluadoras para mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

El no cumplimiento de estas condiciones facultará

al Estado Nacional a someter a pruebas de evaluación a los graduados para su habilitación profesional."

35º Aniversario de Eudeba

Durante el transcurso del pasado año, se realizaron diversos homenajes para conmemorar el 35º aniversario de la fundación.

En esta oportunidad, la Secretaría de Políticas Universitarias, se sumó a quienes saludaron la trayectoria de esa editorial que ha sabido desarrollar con éxito una amplia tarea de extensión universitaria.

Que ha registrado a través de sus publicaciones los nuevos dilemas de la historia convertidos en temas de trascendencia primordial.

Que ha contemplado en las mismas, la defensa de lo nacional-popular sin anteponer desatinadas contraposiciones con culturas de cuño universalista.

Y que, desde Borges a Houssay, con equilibrada sabiduría y predominante buen gusto, a través de sus variadas ediciones supo valorizar la ciencia y el arte, la tecnología y la cultura porque la actividad artística es tan válida como la científica ya que ambas son fruto de la creación humana y convergen en un vértice único: la búsqueda del conocimiento.

**EL SECRETARIO DE POLÍTICAS
UNIVERSITARIAS
RECORRE UNIVERSIDADES DEL
INTERIOR DEL PAÍS.**

El Secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, Lic. Juan Carlos Del Bello, realizó una gira por las casas de altos estudios del interior del país.

La misma, tuvo como objeto conocer en profundidad la realidad de cada centro universitario, reunirse con los respectivos consejos

superiores para debatir con ellos la problemática universitaria y aportar entre todos, soluciones que contribuyan a la transformación del sistema universitario.

El recorrido, se inició el 30 de abril de 1993 e incluyó a partir de esa fecha y a lo largo del presente año, la totalidad de las casas de altos estudios de todo el país.

Instituto Universitario de Ciencias Médicas

Al acto inaugural del ciclo lectivo del Instituto Universitario de Ciencias Médicas asistieron el Presidente de la Nación, Dr. Carlos Saúl Menem; el Ministro de Cultura y Educación, Ing. Jorge Rodríguez y el Secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, Lic. Juan Carlos del Bello.

En calidad de anfitriones, estuvieron presentes el presidente de la Fundación Favalaro, Dr. René Favalaro y el rector de la Casa de Altos Estudios, Prof. Ricardo H. Pachel.

El Presidente de la Nación, expresó su satisfacción por el perfil de investigación básica y aplicada del Instituto y por su calidad y excelencia, reivindicando una trayectoria de tres años de autoridad total que respaldan la enseñanza de la ciencias médicas.

El Dr. Favalaro se dirigió a los presentes, expresando que "(...) el origen socioeconómico no es impedimento para ingresar en el Instituto Universitario de Ciencia Médicas, pues existe un sistema de becas destinados a aquellos alumnos que provengan de hogares humildes. Aquí -agregó- el único factor de exclusión es la capacidad y el esfuerzo del ingresante". Asimismo, destacó que los estudiantes de segundo año ya comienzan a prestar asistencia médica en villas de emergencia y centros de salud de la periferia, cumpliendo desde muy temprano con la práctica médica enmarcada por un alto contenido social y humanitario. Resaltó también, "la importancia de los contenidos éticos que en la carrera de medicina son de tanta importancia como los técnicos".

Por último, hizo uso de la palabra un estudiante, quien -entre otras cosas- dijo "aquí, la nota no es importante; es lo más importante."

Convenios celebrados entre el MCyE y las universidades para el mejoramiento de la calidad universitaria.

Entre los meses de agosto de 1993 y marzo de 1994, el Ministerio de Cultura y Educación, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) firmó una serie de convenios con Universidades y Asociaciones de Facultades para la evaluación y el mejoramiento de la calidad universitaria. Estos convenios se establecen sobre la base de una propuesta que enviara la SPU a todas las universidades argentinas.

Las unidades de análisis a evaluar son propuestas por las universidades y la experiencia comprende actividades de evaluación interna y externa. Para la evaluación interna la universidad explicita las pautas metodológicas a adoptar y conforma una Comisión de Autoevaluación para cada Unidad de Análisis. Para la evaluación externa, las partes acuerdan los mecanismos a seguir y la conformación de una comisión que estará a cargo de la misma, tomando los criterios utilizados en la selección de miembros de jurados o evaluadores.

La universidad asume los gastos del proceso de autoevaluación y la SPU los correspondientes al apoyo técnico requerido y a la evaluación externa. Asimismo la Secretaría ofrecerá o gestionará los apoyos técnicos o financieros necesarios para la aplicación de los planes de mejoramiento.

En estos meses se firmaron 11 convenios entre el MCyE y las siguientes Universidades o Asociaciones de Facultades: Universidad Nacional de San Juan, Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Nacional de Río IV, Universidad Nacional del Sur, Universidad Nacional de Luján, Universidad Federal de la Patagonia Austral, Universidad Nacional de la Patagonia "San Juan Bosco", Universidad Nacional del Centro de la Pcia. de Buenos Aires, Universidad Nacional del Nordeste, Asociación Universitaria de Educación Agropecuaria (AUDEAS) y la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas de la República Argentina (AFACIMERA).

CURSO DE INSTRUCTORES DE EDUCACION EN HIV/SIDA DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES.

En mayo del corriente año, se realizó el "II Curso Internacional de Educación en HIV/SIDA" dirigido a agentes de salud de las 31 universidades estatales de todo el país y patrocinado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Cultura y Educación.

Al acto de apertura asistió el Licenciado Juan Carlos del Bello, titular de la Secretaría de Políticas Universitarias, quién manifestó "la importancia de la educación como elemento fundamental para la prevención del SIDA entre el casi millón de jóvenes estudiantes que integran la población universitaria".

Asimismo, destacó "la necesidad de la concientización de la población universitaria acerca de la problemática del SIDA tanto en lo que hace a la prevención de nuevos casos como en lo que hace a la no discriminación de las personas ya afectadas por el virus, alentándolas a buscar asesoramiento médico y promoviendo el respeto a la totalidad de sus derechos humanos".

El curso fue organizado por la Fundación Ginkgo Biloba y fue declarado de interés por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Su objetivo es organizar la Red Nacional de Educadores en la Prevención de VIH/SIDA para replicar esta información a la población estudiantil estimada en 1.000.000 de alumnos.

El curso estuvo a cargo de los especialistas:

Jaime Acosta, especialista en Educación para la salud del *Mount Sinai Hospital* de Nueva York, Facultativo Nacional de Educación en VIH/SIDA de la Cruz Roja Americana.

Lic. Maria Szalardi, Coordinadora de Educación y Prevención de la Fundación Ginkgo Biloba y Facultativa Nacional de Educación en VIH/SIDA de la Cruz Roja Americana.

Derechos Humanos

Ante la denuncia realizada por la Universidad Nacional de Misiones sobre averiguaciones realizadas por personal de Gendarmería acerca de la filiación política o gremial de miembros de la comunidad universitaria, el Ministro de Cultura y Educación de la Nación condenó cualquier intento, aislado o no, tendiente a resucitar persecuciones ideológicas individuales o a la institución universitaria que es la creadora e impulsora de un saber exhaustivo y crítico en tanto autónomo y sin condicionamientos.

Porsu parte, y dado que nuestra tarea debe desarrollarse en el marco de la defensa irrestricta de la democracia y de la libertad, el Secretario de Políticas Universitarias, Licenciado Juan Carlos Del Bello, solicitó a los señores Rectores de todas las Casa de Altos Estudios que integran el sistema universitario que, ante cualquier requerimiento, escrito o no, que indague sobre la pertenencia política o gremial, el mismo no sea contestado y se mantenga una estrecha comunicación con la Secretaría sobre el particular.

El Secretario agregó además que "Estamos seguros que con la colaboración de todos sabremos rechazar cualquier avance de quienes pretenden reinstalar el autoritarismo y la intolerancia como método para impedir el camino del crecimiento y la estabilidad de nuestra patria, que sólo puede ser transitado en libertad y en democracia."

SOBRE LOS CONVENIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD CELEBRADOS CON UNIVERSIDADES Y ASOCIACIONES DE FACULTADES

Por Carlos Marquís

En los inicios de esta gestión ministerial, otoño de 1993, había en la comunidad universitaria un fuerte debate sobre la pertinencia de la evaluación de la calidad universitaria. Se discutía sobre cuestiones ideológicas y conceptuales; problemas políticos y contractuales; así como aspectos técnicos y metodológicos. Se trataba, sin embargo, de un debate retórico y especulativo, ya que habiendo suficientes propuestas metodológicas, existían muy escasas experiencias nacionales sobre las cuales sostener las afirmaciones, cualesquiera que estas fueran.

El Ministerio de Cultura y Educación concebía, entonces y ahora, la evaluación de la calidad como un instrumento clave en el proceso de transformación educativa, y la educación universitaria no es una excepción. Pero era necesario acumular conocimiento fáctico

Los Convenios De Evaluación Como Instrumento; La Calidad Como Meta.

y generar experiencias que permitieran probar hipótesis, corregir mecanismos, crear instrumentos, despejar temores, etc. Por ello la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) propuso a las universidades celebrar convenios conducentes a desarrollar actividades de evaluación para el mejoramiento de la calidad.

A partir de agosto de 1993, y a lo largo de este año, el Ministro de Cultura y Educación firmó convenios con once instituciones: nueve universidades y dos asociaciones de facultades, en los que se acordó básicamente lo siguiente:

*La institución define la metodología a emplear, acordando con la SPU el seguimiento de unas pautas mínimas comunes.

*Para la autoevaluación la SPU ofrece apoyo técnico a las instituciones que lo

requieran y financian los gastos que implique la evaluación externa.

*La SPU se compromete a apoyar, y/o gestionar los apoyos necesarios, para que el plan de mejoramiento de la calidad pueda llevarse a cabo.

PRIMER BALANCE DE LAS EXPERIENCIAS

En el desarrollo de estas actividades algunas universidades han avanzado más rápidamente que otras, sin que hasta ahora haya ningún proceso totalmente concluido. Existen desarrollos diferenciales, muchos de los cuales se analizaron en el *Taller sobre Experiencias de Evaluación Universitaria* que la SPU llevó a cabo en junio de 1994, y aunque no es posible realizar una evaluación de estos trabajos, sí existen algunos aprendizajes que parece oportuno resaltar:

*Para iniciar las actividades de evaluación es imprescindible contar con una clara decisión político - académica de las autoridades universitarias: personales y colegiadas. Es necesario, también, que exista predisposición positiva por parte de la comunidad universitaria.

*Se deben elegir

mecanismos y procedimientos simples y homogéneos, sobre todo en estas primeras experiencias de carácter piloto, que faciliten la elaboración de un primer diagnóstico sobre el cual sea posible emitir opiniones valorativas.

*Es necesario que exista un grupo de universitarios, cuyas opiniones sean apreciadas por el resto de la comunidad, que analice críticamente y sintetice los diagnósticos y las opiniones parciales.

"Para la etapa de autoevaluación algunas universidades han planteado consultar con diferentes asesores y, naturalmente, así lo han hecho; en otros casos la propia SPU los ha apoyado".

Para la etapa de autoevaluación algunas universidades han planteado consultar con diferentes asesores y, naturalmente, así lo han hecho; en otros casos la propia SPU los ha apoyado. Hasta ahora no han sido

encaradas en forma sistemática las evaluaciones externas, aunque las Universidades Nacionales del Sur y del Nordeste se encuentran próximas a hacerlo. Los evaluadores externos surgirán por acuerdo entre las partes, siendo requisitos para tener ese carácter cumplir con alguna de las siguientes condiciones:

*Ser investigador principal o superior del CONICET o de organismos provinciales equivalentes.

*Ser docente investigador con categoría A en el Programa de Incentivos de la SPU.

*Ser profesor titular regular de alguna universidad argentina o extranjera de reconocido prestigio.

*Tener un desempeño profesional destacado, en particular para aquellas disciplinas de carácter profesionalista.

En los próximos boletines se irá brindando mayor información sobre la marcha de los convenios, los que hasta ahora parecen ser una experiencia muy enriquecedora tanto para las instituciones universitarias, cuanto para el propio MCyE.

Informe

Nuevas Iniciativas Privadas

Durante el curso del corriente año, el Poder Ejecutivo Nacional autorizó provisionalmente la creación y el funcionamiento de nuevas universidades privadas: la Universidad Hebrea Argentina Bar Ilan, La Universidad Cuenca del Plata, y la Universidad del Cine. Las autorizaciones provisorias precitadas se enmarcan en la ley N°17.604 de universidades privadas y el reciente decreto reglamentario N° 2330-93, que estableció disposiciones estrictas para la evaluación de la calidad intrínseca de los proyectos de nuevas universidades de gestión privada.

Universidad Bar Ilan

La Universidad Hebrea Argentina Bar Ilan funcionará en la Ciudad de Buenos Aires y estará integrada inicialmente por las facultades de Humanidades y de Ciencias Biológicas, en las que se desarrollarán las carreras de Medicina, licenciatura en Psicología, licenciatura en Ciencias Biológicas y licenciatura en Organización y Dirección Institucional.

Esta nueva universidad cuenta con un importante apoyo de la comunidad judía argentina y de la Universidad Bar Ilan de Israel.

El proyecto fue evaluado favorablemente por destacados expertos nacionales pertenecientes a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, al Departamento de Biología de la Universidad Nacional del Sur y a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, entre otros.

También se expidieron favorablemente el Consejo de Rectores de las Universidades Privadas (CRUP) y la Comisión Consultiva de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, que integran entre otros los ex-rectores Emilio F. Mignone y Angel Luis Plastino. ♠

Universidad Cuenca del Plata

En abril de 1994 tuvo lugar en el teatro oficial Juan de Vera, en Corrientes, la ceremonia de inauguración de la Universidad de la Cuenca del Plata, que abre nuevas posibilidades y propuestas académicas para los correntinos en el campo de la educación, la cultura y las ciencias.

Estuvieron presentes en el acto el Ministro de Cultura y Educación de la Nación, Jorge Rodríguez y del Gobernador de la Provincia, Raúl Romero Feris.

Ante el numeroso público convocado en el coliseo, el Ministro Rodríguez calificó de "ceremonia de significativa relevancia este acto en el que se inaugura una casa de altos estudios".

"De esta manera -expresó- se corona el esfuerzo realizado por los miembros de esta comunidad para concretar la creación y funcionamiento de la Universidad de la Cuenca del Plata, a la que ha sido otorgada la autorización provisional mediante el decreto correspondiente, dentro del régimen de universidades privadas que marca la ley."

"A esta instancia -destacó- se llegó por un severo proceso de evaluación tal como lo impone la normativa vigente, con el propósito de garantizar la calidad y la excelencia del proyecto. En este proceso, intervinieron el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP) y también reconocidos expertos que tuvieron a su cargo el estudio de la propuesta."

"Por otra parte, desde el Ministerio de Cultura y Educación hemos analizado cuidadosamente la propuesta académica elevada por los precursores de la iniciativa y con esa misma responsabilidad, se realizaron cuidadosas inspecciones a las instalaciones, a fin de certificar su aptitud para el fin educativo al que están destinadas." ♠

Universidad del Cine

El Ministro de Cultura y Educación de la Nación, Ingeniero Jorge Rodríguez, firmó la resolución que concede autorización provisional para funcionar a la Universidad del Cine.

La nueva institución universitaria, se propone insertar la enseñanza específica del cine y la televisión en un marco global de formación humanística dentro del cual la literatura, el arte y la cultura universal, resultan tan importantes como el conocimiento del manejo de una cámara o los secretos de la compaginación.

La iniciativa encuentra antecedentes de importancia en experiencias realizadas en otros países y nace con el patrocinio de la Fundación Universidad del Cine. Esta institución con reconocida solvencia académica y responsabilidad social para la formación de profesionales e investigadores en el área de la comunicación en general y de la cinematografía en particular, está impulsada por una personalidad de reconocida trayectoria como es Manuel Antín.

El Ministerio de Cultura y Educación de la Nación fundamenta su decisión en el dictamen de varios expertos y, fundamentalmente en la opinión emitida por el Departamento de Cine de la Escuela de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Córdoba. El dictamen de dicha casa de altos estudios estimó que el proyecto cumplimenta con amplitud los requerimientos exigidos por las normas legales vigentes, destacando la descripción clara de metas y objetivos y la adecuada planificación de sus carreras. En la Universidad del Cine se podrán cursar las carreras de: Cinematografía y Comunicación Visual; conducentes a los títulos de Licenciado en Cinematografía, Profesorado de Cinematografía, Realizador Cinematográfico, Productor Cinematográfico, Iluminador y Camarógrafo Cinematográfico, Escenógrafo y Vestuarista Cinematográfico, Compaginador Cinematográfico, Guionista Cinematográfico, Crítico Cinematográfico; Licenciado en Comunicación Visual y Profesor en Comunicación Visual. ♠

75° Aniversario de la Reforma Universitaria

La Reforma Universitaria constituyó en aquel momento un hecho revolucionario, donde bajo inspiración jacobina ,los estudiantes del '18 fundaron un nuevo espíritu universitario. La autonomía y el cogobierno universitario fueron logros irrenunciables de aquella gesta que se desarrolló en la ciudad de Córdoba. A su vez, la Reforma Universitaria tuvo un gran contenido integrador hispanoamericano desde el Mensaje a los Hombres Libres de América. Una gesta universitaria que nos enorgullece pero que también ,malinterpretando el concepto de autonomía generó a veces, procesos de aislamiento de la sociedad ya que muchas veces no pudo comprender los fenómenos políticos y culturales del campo nacional y popular.

Como en el '18, hoy es necesaria una nueva reforma que desde un debate amplio, imaginativo, libre y responsable reformule el papel de las universidades. Como en el '18, precisamos una nueva revolución académica pero que no esté divorciada de la realidad política, económica y cultural del país. Que funde un nuevo espíritu universitario recogiendo los valores de la autonomía, la libertad de cátedra y el cogobierno, y que pueda introducir conceptos tales como la planificación, la vinculación de la universidad con la sociedad y su participación, el concepto de educación permanente y otros.

Proyecto de Ley de Régimen Económico- Financiero de las Universidades Nacionales

El 13 de agosto de 1993, el Poder Ejecutivo Nacional, elevó al Honorable Congreso de la Nación, el proyecto de ley por el que se establece una nueva regulación del régimen económico financiero de las Universidades Nacionales.

En oportunidad de celebrarse el XXV Plenario de Rectores de Universidades Nacionales en Jujuy, los días 24 y 25 de febrero pasado, la Secretaría de Políticas Universitarias acordó introducir nuevos cambios al proyecto en cuestión, en razón de lograr el más amplio de los consensos y teniendo en cuenta que los mismos apuntan a profundizar la autarquía económica - financiera de las Universidades Nacionales.

Es fundamentalmente para dotar a las universidades de un mayor grado de autarquía económica y financiera, que se las habilita a obtener fuentes complementarias de financiamiento y se las induce a introducir mayor racionalidad en la asignación presupuestaria y en el gasto, al darles plena responsabilidad en la determinación de sus propios presupuestos y al permitirles

El 13 de agosto de 1993, el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, elevó al Honorable Congreso de la Nación, el proyecto de ley por el que se establece una nueva regulación del Régimen Económico Financiero de las Universidades Nacionales.

mayor flexibilidad en materia de contrataciones de todo tipo.

El proyecto le otorga a las Universidades atribuciones de las que hoy carecen, estableciendo estímulos y regulaciones que les permitan un más eficaz funcionamiento.

Los puntos más importantes del proyecto de ley son :

La ampliación de fuentes de financiamiento autorizadas por la legislación actual, removiendo las restricciones existentes y sin que ello implique suprimir o sustituir ninguna de las fuentes ya previstas -particularmente el aporte estatal-, las que deberán acrecentarse todo cuanto sea posible.

Se otorga a las universidades expresa atribución de conformar sociedades públicas o privadas en todas sus formas, para desarrollar la investigación científica, generar y transferir tecnología, realizar tareas de consultoría, o profundizar la extensión universitaria en todas sus manifestaciones.

Para garantizar que el Estado

Con respecto
a la forma en
que las
Universidades
se distribuirán
el conjunto de
recursos
asignados
por el Estado,
se establecen
nuevos
criterios que
tienden a
otorgar mayor
transparencia
al sistema.

Nacional deba mantener los aportes presupuestarios a sus universidades, se incluye una norma expresa que **prohíbe la disminución de los aportes por parte del Estado Nacional.**

Se posibilita una aplicación automática de las disponibilidades financieras de las universidades, sin requerir autorización previa.

Con respecto a la forma en que las universidades se distribuirán el conjunto de recursos asignados por el Estado, se establecen nuevos criterios que tienden a otorgar mayor transparencia al sistema.

En materia de compras y contrataciones, se propone definir en conjunto con la universidades las normas específicas para el sector. Las universidades podrán realizar modificaciones en sus plantas de personal sin requerir autorización previa del organismo pertinente del Poder Ejecutivo Nacional, siempre que las mismas no impliquen un aumento de costo.

Las universidades podrán

otorgar asignaciones complementarias no permanentes en calidad de premio al personal de su dependencia, los cuales deberán ser financiados con recursos derivados de las reorganizaciones que se produzcan o por recursos propios.

Se prevé la constitución de una comisión integrada por el Ministerio de Cultura y Educación y las Universidades Nacionales para regularizar todos los problemas de dominio de inmuebles.

Como contrapartida del afianzamiento más adecuado de la autarquía administrativo-económico y financiera, se establece un control de gestión que realizarán los Consejos Superiores y la obligación de publicar información de carácter económico que deberá contar con dictamen de auditoría.

Con respecto al controvertido artículo 7, referido a las contribuciones estudiantiles, nos referiremos a él en un aparte para intentar explicarlo más detenidamente con el propósito de contribuir a esclarecer dudas sobre el mismo. ♣

Mejoramiento del Sistema de Información Universitaria

Dada la situación de emergencia informativa por la que atravesaba el sector de Estadísticas Universitarias a comienzos del año 1993, la Secretaría de Políticas Universitarias creó por Resolución M.C.y E. N 1069/93, el **Sistema de Información Universitaria (SIU)**, integrado al Sistema Estadístico Nacional.

Para llevar adelante las políticas allí señaladas, se encargó al Programa de Mejoramiento del Sistema de Información Universitaria, la concreción de los siguientes objetivos:

- Diseñar el Sistema de Información Universitaria;
- Reconstruir las Series de Estadísticas Básicas;
- Elaborar regularmente la información básica para la toma de decisiones a nivel central y de cada una de las universidades;
- Difundir periódicamente la información global del sistema en su conjunto;
- Diseñar la Red Informática Universitaria

Durante el año 1993 y parte de 1994 se han encarado algunas líneas de acción tendientes a rediseñar el nuevo sistema de información universitaria. Se partió de la actualización de las series de

Dada la situación de emergencia informativa por la que atravesaba el sector de Estadísticas Universitarias a comienzos del año 1993, la Secretaría de Políticas Universitarias creó por Resolución M.C.y E. N° 1069/93, el **Sistema de Información Universitaria (SIU)**, integrado al Sistema Estadístico Nacional.

estadísticas básicas que habían sido interrumpidas en el año 1985, para lo cual se diseñaron bases de datos con las principales variables cuantitativas: alumnos, nuevos inscriptos, egresados y docentes. Esta información permite obtener rápidos diagnósticos sobre la situación de las universidades nacionales, privadas y provinciales. Asimismo se elaboraron algunos indicadores universitarios que constituyen un punto de partida para la obtención de medidas comparativas de desempeño de las universidades, realización de estudios de seguimientos de cohortes, análisis de flujo de estudiantes y la obtención de medidas de eficiencia y rendimiento de las universidades. Una parte de la recuperación estadística se publicó en el documento "Estadísticas Básicas de Universidades Nacionales. Años 1982-1992." La próxima publicación presentará las respectivas series e indicadores de las Universidades Privadas.

En forma paralela, se inició en conjunto con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), un trabajo de relevamiento de las capacidades técnicas de las áreas responsables de producir estadísticas en las Universidades Nacionales que permitirá realizar

un diagnóstico de la situación de los productores primarios de la información de base.

La oferta académica de las universidades también forma parte del SIU. Está próxima a publicarse la 8va edición de la publicación "Universidades Argentinas-Guía de Carreras 1994-1995", la cual ofrece un panorama amplio acerca de las carreras de *grado y posgrado* de todas las universidades argentinas; tanto a nivel nacional como regional.

Por último, uno de los mayores desafíos que queda por delante implicará, con la participación de todas las Universidades, un trabajo común de análisis y redefinición de las bases del SIU, para recuperar los elementos y resultados positivos de las experiencias pasadas y

adaptarlos a las nuevas modalidades que los actuales sistemas de información requieren. En tal sentido, y con el objeto de acordar las bases metodológicas para su funcionamiento, se realizarán encuentros con las áreas responsables de la producción de información de las universidades. Los documentos de base presentarán una propuesta metodológica y una evaluación de las capacidades técnicas de las áreas responsables de llevarla a cabo en las diferentes universidades.

Algunos datos cuantitativos sobre las Universidades Nacionales:

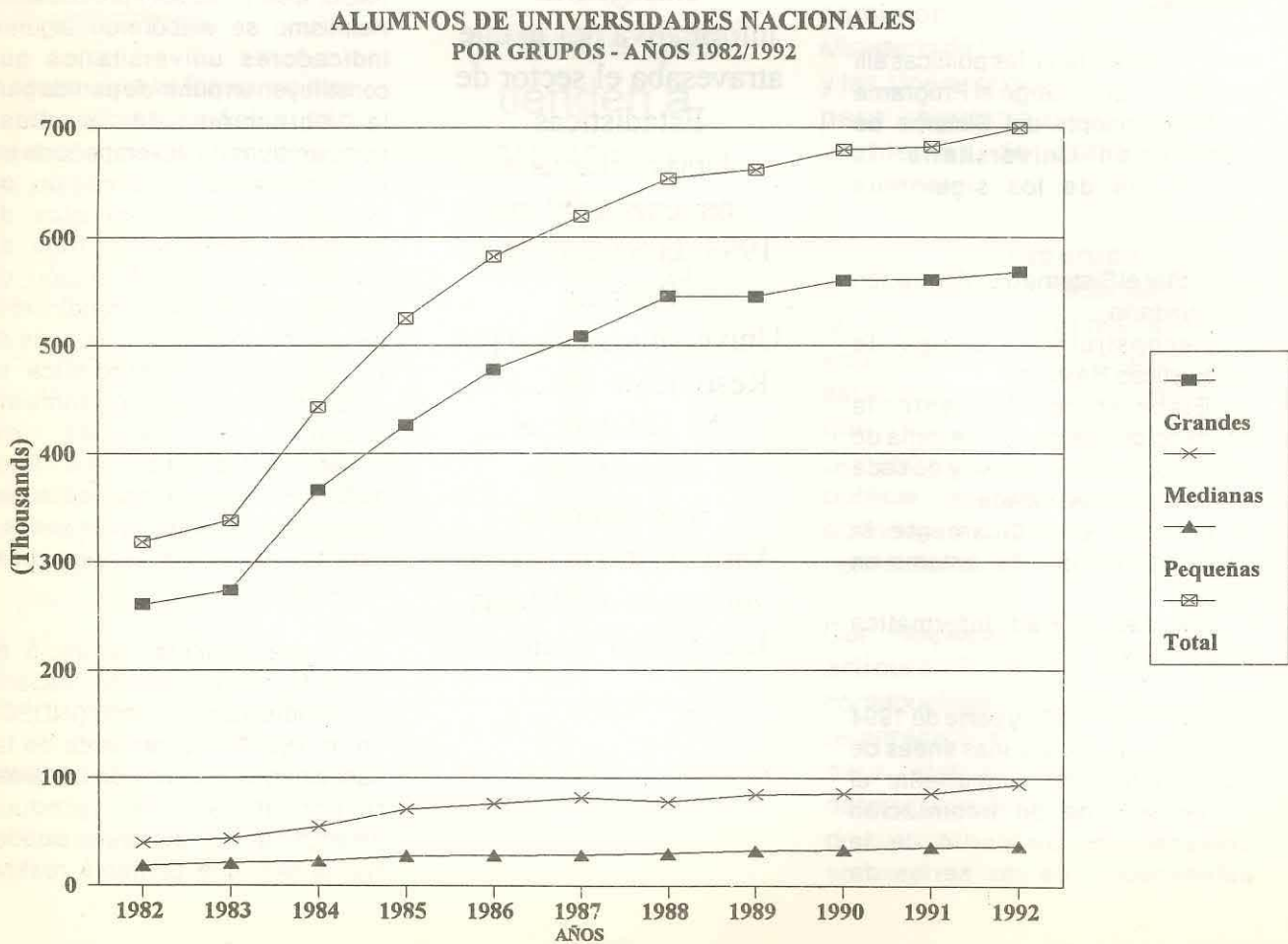
Se presenta aquí un resumen de los resultados obtenidos a partir de la

recuperación de las principales series estadísticas.¹

1. En 1992 el sistema universitario nacional contaba con 699 mil alumnos y 101 mil cargos docentes; en ese año se incorporaron 166 mil nuevos estudiantes y en el anterior egresaron de 132 mil alumnos. En los últimos once años tanto la población estudiantil como el cuerpo docente se duplicaron, los ingresantes se triplicaron y los graduados aumentaron un 20%. Los alumnos crecieron al 8% anual, los docentes al 7%, los nuevos inscriptos al 11% y los egresados al 2% anual.

El gráfico 1 muestra la evolución de los alumnos por grupo a lo largo del período.

GRAFICO 1



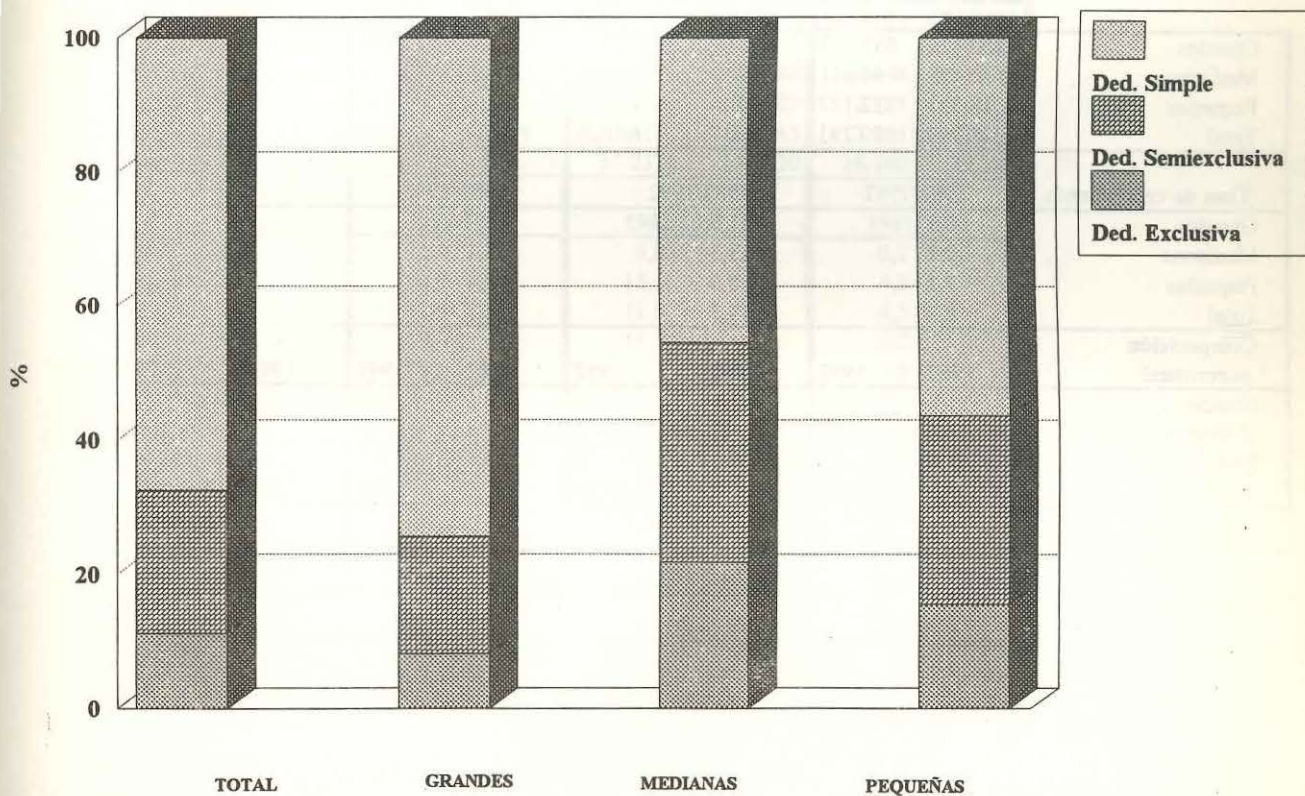
El ritmo de crecimiento de los docentes (gráfico 2) acompaña el proceso de expansión de los nuevos

estudiantes, que entre 1982 y 1985 aumentaron a un ritmo del 50% anual y luego disminuyeron al 2%

por año. Al final del período, las Universidades Grandes concentraban el 81% de los alumnos, el

GRAFICO 2

**CARGOS DOCENTES DE UNIVERSIDADES NACIONALES
POR GRUPO Y DEDICACION - AÑO 1992**



Fuente: S.P.U. - Programa Mejoramiento del Sistema de Información Universitaria en base a datos de las Universidades Nacionales.

75% de los nuevos inscriptos, el 85% de los egresados y el 72% de los docentes, y las Medianas y Pequeñas el resto, como se aprecia en el Cuadro A.

2. Ese aumento en el tamaño estuvo también acompañado por un

apreciable cambio cualitativo en la importancia relativa de las diferentes ramas de estudio (Cuadro B), caracterizado por una fuerte disminución en la participación de las Ciencias Básicas y Tecnológicas (en el caso de los ingresantes cayó del 49 al 33%), y un aumento

pronunciado en el caso de las Sociales (29 a 40%).

El comportamiento de los alumnos fue parecido, aunque las modificaciones en esas mismas ramas fueron menos pronunciadas. El cambio en la composición de los (Sigue en pág. 42)

CUADRO A

Alumnos matriculados, Nuevos Inscriptos, Egresados y Docentes de las Universidades Nacionales, por grupos.

	Total de alumnos		Nuevos Inscriptos		Egresados		Docentes	
	1982	1992	1982	1992	1981	1991	1982	1992
Grandes	260.429	567.505	41.589	123.797	23.414	27.640	...	73.090
Medianas	39.479	94.651	10.248	29.994	2.376	3.236	...	16.943
Pequeñas	18.391	37.137	5.200	12.229	1.190	1.511	...	11.218
Total	318.299	699.293	57.037	166.020	26.980	32.387	52.639	101.251
Tasa de crecimiento	1982/1992		1982/1992		1981/1991		1982/1992	
Grandes	8,1		11,5		1,7		...	
Medianas	9,1		11,3		3,1		...	
Pequeñas	7,3		8,9		2,4		...	
Total	8,2		11,3		1,8		6,8	
Composición porcentual	1982	1992	1982	1992	1982	1992	1982	1992
Grandes	81,8	81,2	72,9	74,5	86,8	85,3	...	72,2
Medianas	12,4	13,5	18	18,1	8,8	10,0	...	16,7
Pequeñas	5,8	5,3	9,1	7,4	4,4	4,7	...	11,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	...	100

S.P.U. - Programa Mejoramiento del Sistema de Información Universitaria en base a datos de las Universidades Nacionales

CUADRO B

Alumnos Matriculados, Nuevos Inscriptos y Egresados de las Universidades Nacionales, por Ramas de Estudio.

	Total de alumnos		Nuevos Inscriptos		Egresados	
	1982	1992	1982	1992	1981	1991
Ciencias Básicas	146.344	252.909	27.951	54.193	9.653	9.822
Ciencias Sociales	97.939	253.532	16.397	66.740	6.948	11.146
Humanidades	30.587	90.420	7.272	21.722	2.788	4.325
Ciencias Médicas	43.429	102.432	5.417	23.365	7.591	7.094
Total	318.299	699.293	57.037	166.020	26.980	32.387
Tasa de crecimiento	1982/1992		1982/1992		1981/1991	
Ciencias Básicas	5,6		6,8		0,2	
Ciencias Sociales	10,0		15,1		4,8	
Humanidades	11,4		11,6		4,5	
Ciencias Médicas	9,0		15,7		-0,7	
Total	8,2		11,3		1,8	
Composición porcentual	1982	1992	1982	1992	1982	1992
Ciencias Básicas	46,0	36,2	49,0	32,6	35,8	30,3
Ciencias Sociales	30,8	36,3	28,8	40,2	25,8	34,4
Humanidades	9,6	12,9	12,7	13,1	10,3	13,4
Ciencias Médicas	13,6	14,6	9,5	14,1	28,1	21,9
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

S.P.U. - Programa Mejoramiento del Sistema de Información Universitaria en base a datos de las Universidades Nacionales

egresados fue similar al que experimentó toda la población estudiantil.

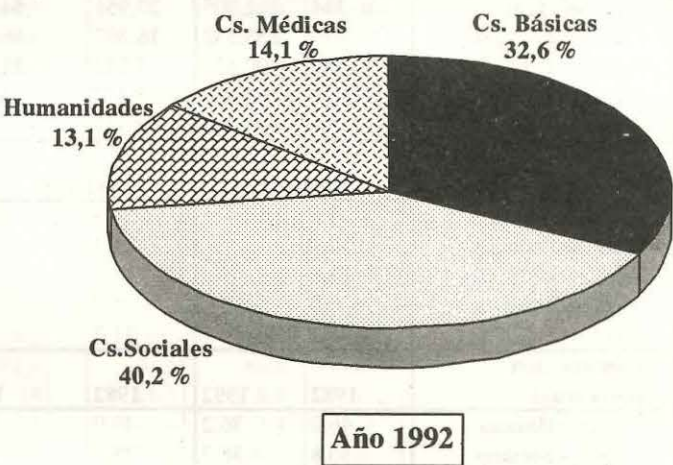
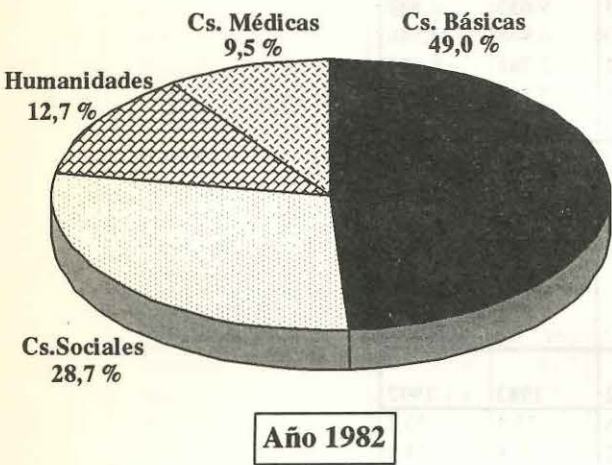
Las ramas que más rápidamente crecieron en alumnos, nuevos inscriptos (gráfico 3) y egresados (gráficos 4 y 5) fueron Humanidades, Ciencias Médicas y Ciencias Sociales respectivamente. Si se

observa el comportamiento de los ingresantes, las disciplinas más dinámicas fueron Derecho, Otras Ciencias Sociales y Auxiliares de la Medicina y las de más lento crecimiento las Ciencias Agropecuarias, las Ingenierías y las Ciencias Exactas.

3. El cuerpo docente, por su parte,

aumentó a lo largo del período a un ritmo del 7% anual. A su término, las Universidades Grandes contaban con casi tres cuartos de los docentes, las Medianas con un sexto y las Pequeñas con algo más de un décimo. El 40% eran profesores y el 60% restante auxiliares de la docencia. Dos tercios tenían dedicación simple, un quinto (Sigue en pág. 45)

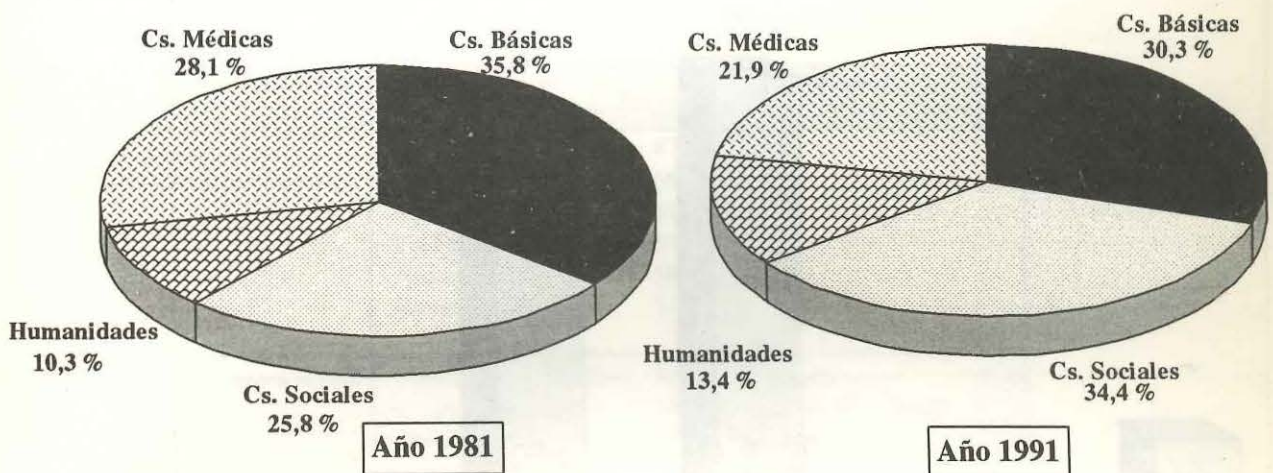
GRAFICO 3
NUEVOS INSCRIPTOS DE UNIVERSIDADES NACIONALES
POR RAMAS DE ESTUDIO - AÑOS 1982 y 1992



Fuente: S.P.U. - Programa Mejoramiento del Sistema de Información Universitarias en base a datos de las Universidades Nacionales.

GRAFICO 4

**EGRESADOS DE UNIVERSIDADES NACIONALES
POR RAMAS DE ESTUDIO - AÑOS 1981 y 1991**



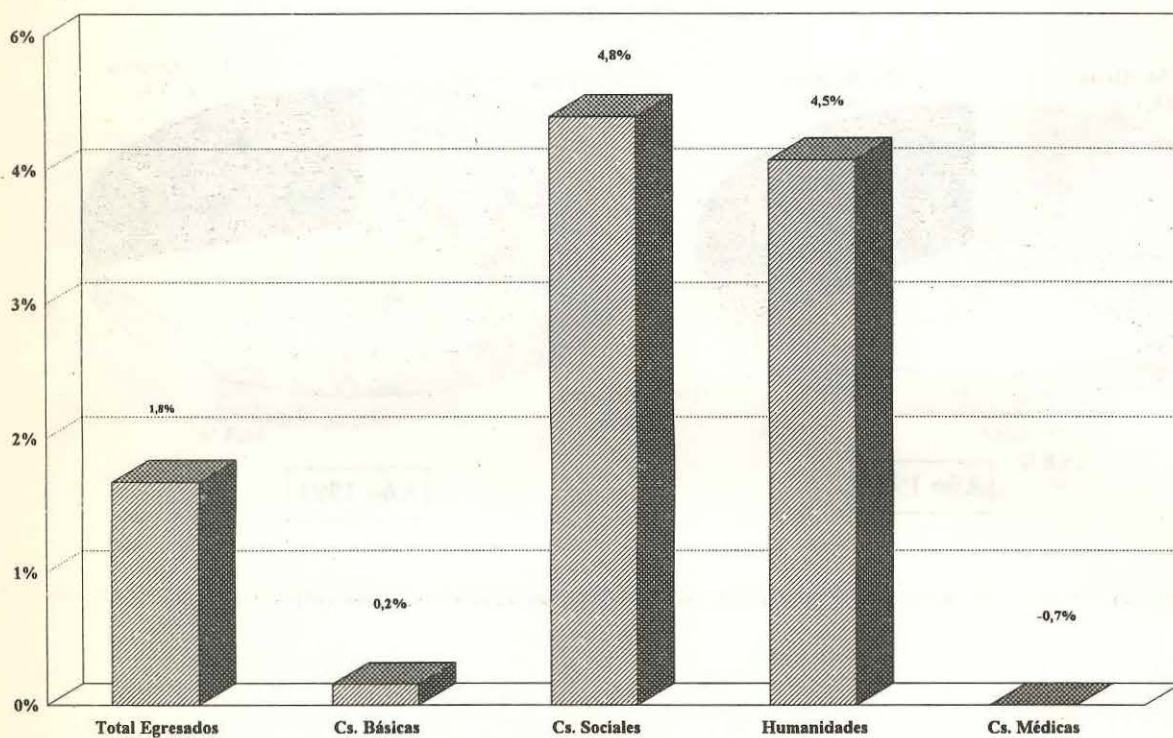
Fuente: S.P.U. - Programa Mejoramiento del Sistema de Información Universitaria en base a datos de las Universidades Nacionales.

GRAFICO 5

EGRESADOS DE UNIVERSIDADES NACIONALES

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL - POR RAMAS DE ESTUDIO

PERIODO 1981/1991



Fuente: S.P.U. - Programa Mejoramiento del Sistema de Información Universitaria en base a datos de las Universidades Nacionales.

semidedicación y sólo poco más de un décimo era de dedicación exclusiva. Además, tanto la categoría como la dedicación parecían estar inversamente relacionadas con el tamaño, porque las Universidades Grandes tenían una proporción mayor de auxiliares y de cargos de tiempo simple que

las Medianas y las Pequeñas.

El análisis de los cargos docentes por grupos de facultades (Cuadro C) indica que la distribución de las dedicaciones era diferente según la categoría. Los profesores con dedicaciones exclusivas y semiexclusivas prevalecían en las

facultades de Bioquímica, Farmacia y Química y Odontología. A la inversa, las dedicaciones simples se encontraban en una proporción superior en las Ciencias Sociales. Respecto del cuerpo de auxiliares, las mayores dedicaciones se encontraban en algunas disciplinas de las Ciencias Básicas y

CUADRO C

Cargos docentes por dedicación según grupo de Facultades. Año 1992
(en porcentajes)

Cargos por dedicación	Profesores		Auxiliares	
Más de 50% de cargos exclusivos y semiexclusivos	Bioquímica	87,7		
	Odontología	66,7		
	Agronomía	61,5		
	Cs. Exactas	59,9		
	Arquitectura	58,6		
	Humanidades	51,8		
Más de 50% de cargos simple	Derecho y Cs. Sociales	73,4	Arquitectura	88,8
	Cs. Económicas	68,5	Derecho y Cs. Sociale	83,1
	Medicina	53,2	Medicina	78,3
	Ingeniería	50,2	Odontología	77,4
			Cs. Económicas	77,2
			Humanidades	73,8
			Ingeniería	72,4
			Cs. Exactas	66,3
			Bioquímica *	56,8
			Agronomía	50,4

S.P.U. - Programa Mejoramiento del Sistema de Información Universitaria en base a datos de las Universidades Nacionales

* Incluye Farmacia y Química

Tecnológicas.

4. Aunque los resultados proporcionados por los indicadores que se resumen en los Cuadros D y E deben considerarse con reservas por sus limitaciones y en particular por las que imponen los datos, muestran varias cuestiones importantes. En primer lugar, señalan que en 1992 las Universidades Nacionales tenían 13

alumnos por cada docente (de dedicación exclusiva equivalente), una relación media relativamente baja tomando en cuenta parámetros internacionales, pero con una fuerte dispersión entre Universidades.

En segundo lugar, indican que las Universidades obtenían 19 egresados por cada 100 ingresantes, es decir que el sistema requería 5,2 alumnos para obtener un egresado,

lo cual insinúa un bajo nivel de eficiencia. En tercer lugar, se aprecia una considerable demora en el cursado de los estudios ya que la duración observada de las carreras supera en más del 60% a la prevista en los planes de estudio. En cuarto lugar, del análisis de un conjunto de carreras se concluye que sólo un tercio de los recursos educativos fueron destinados a alumnos que egresaron del sistema.

CUADRO D

Indicadores de Desempeño por grupos de Universidades.

	Alumnos por Docente	Egresados por Ingresante %	Reinscripción %	Relación duración teórica y media de las carreras
Grandes	25	20	75	1,50
Medianas	12	17	68	1,59
Pequeñas	8	15	71	1,73
TOTAL	13	19	71	1,61

S.P.U. - Programa Mejoramiento del Sistema de Información Universitaria en base a datos de las Universidades Nacionales
Nota: Los indicadores se refieren a los años 1991 o 1992 según corresponda.

CUADRO E

Indicadores de Desempeño por Facultades y Carreras.

	Alumnos por Docente (*)		Egresados por Ingresante (*) %		Reinscripción (%) %		Relación duración teórica y media de las carreras (**) %		Utilización de los Recursos Educativos (**) %	
Sobre el Prom.	Derecho	68	Odontología	34	Odontología	79	Contador Público	1,70	Odontólogo	0,48
	Cs. Económicas	33	Bioquímica	27	Arquitectura	75	Ingeniería	1,67	Ingeniería	0,48
	Medicina	26	Medicina	24	Bioquímica	74	Cs. Exactas	1,62	Médico	0,42
	Arquitectura	19	Arquitectura	24	Agronomía	73	Ing. Agrónomo	1,62	Ing. Agrónomo	0,42
	Odontología	18	Agronomía	22	Cs. Económicas	73			Arquitecto	0,39
	Bioquímica	13	Ingeniería	19	Medicina	72				
	Humanidades	13			Humanidades	71				
	Promedio	13	Promedio	19	Promedio	71	Promedio	1,61	Promedio	0,33
Bajo el Prom.	Ingeniería	9	Humanidades	16	Derecho	69	Bioquímico	1,49	Bioquímico	0,33
	Cs. Exactas	8	Derecho	14	Cs. Exactas	68	Arquitecto	1,45	Lic. en Psicología	0,31
	Agronomía	7	Cs. Exactas	12	Ingeniería	68	Lic. en Psicología	1,39	Cs. Exactas	0,31
			Cs. Económicas	12			Abogado	1,37	Contador Público	0,23
							Odontólogo	1,34	Abogado	0,16
							Médico	1,34		

S.P.U. - Programa Mejoramiento del Sistema de Información Universitaria en base a datos de las Universidades Nacionales

Notas:

(*) Indicador por Facultades

(**) Indicador por Carreras

Los indicadores se refieren a los años 1991 o 1992 según corresponda.

El análisis por grupos pareciera mostrar, además, que la relación alumno por docente aumenta y la duración de las carreras disminuye con el tamaño de las Universidades, y que los egresados por ingresantes y las tasas de reinscripción son más elevadas en las Grandes.

Por último, si se toman en cuenta

los resultados de estos indicadores en algunas facultades específicas, se observa que Odontología es la que más se acerca a los mejores valores, pues tiene 13 alumnos por docente, 34 egresados por cada cien ingresantes, una duración media de sólo el 34% por encima de la teórica y una tasa de reinscripción del 79%. Humanidades, por su parte,

es la que se mantiene cercana al promedio general, y Ciencias Económicas, la que más se aleja de esos valores. ♣

NOTAS:

(1) Para ampliar esta información ver: M.C. y E. (1994); "Estadísticas Básicas de las Universidades Nacionales. 1982-1992".

Contribución estudiantil

En vista de la errónea interpretación del artículo 7 del proyecto de ley del Nuevo Régimen Económico Financiero para las universidades nacionales por parte de sectores universitarios, y de la cual se han hecho eco diversos medios de comunicación, se ha considerado conveniente proponer al Congreso de la Nación la siguiente modificación:

En lugar de:

ART.7.e) Establecer contribuciones, derechos o tasas en determinadas carreras de grado o estudios de post-gradó, en cuyo caso deberán establecerse exenciones, para quienes por razones justificadas, no puedan sufragarlos, de forma tal que ningún alumno se vea imposibilitado de cursar sus estudios por razones económicas. Estos recursos deberán destinarse prioritariamente a financiar las becas a que se refiere el inciso siguiente, y en

ningún caso podrán destinarse a gastos en personal.

Deberá decir:

ART.7..e) Establecer contribuciones, derechos o tasas por estudios de grado y posgrado. Para los estudios de grado estarán exceptuados de su pago los estudiantes que provengan de hogares cuyos ingresos totales sean inferiores a los 1.500 pesos mensuales, de forma tal que ningún alumno se vea imposibilitado de cursar sus estudios por razones económicas. Estos recursos deberán destinarse prioritariamente a financiar las becas a que se refiere el inciso siguiente, y en ningún caso podrán destinarse a gastos en personal.

Se establece así, una línea divisoria, por debajo de la que se determina la gratuidad sin excepción de los estudios universitarios de grado. Dicha

línea se define por el total de los ingresos del hogar al que pertenece el estudiante universitario y se propone en 1.500 pesos.

En los hogares comprendidos debajo de la línea de 1.500 pesos mensuales están incluidos aproximadamente el 80% de los menores de 15 años, que cursan la escuela primaria o que deberán cursar el nivel de la educación básica obligatoria que prevee la Ley Federal de Educación.

En síntesis, el 80% de los estudiantes de la escuela primaria tiene garantizada la enseñanza universitaria gratuita. De esta manera se da cumplimiento a los principios de gratuidad y equidad previstos en la Ley Federal de Educación y se amplía la autonomía universitaria al levantar la prohibición a las universidades a establecer contribuciones estudiantiles dejando librada la facultad de hacerlo a cada casa de estudios (tampoco se obliga a hacerlo). ♦

Encuesta

La opinión pública y el arancelamiento de la Universidad Nacional

El debate acerca de un posible arancelamiento de la Universidad pública y de la sanción de una ley que faculte a las universidades para tomar esta decisión, motivó esta encuesta que el estudio Mora y Araujo, Noguera y Asociados realizó a nivel nacional.

	FICHA TECNICA
Dirección	Estudio Sociológico y Político Mora y Araujo, Noguera y Asociados
Fecha de relevamiento	20 de agosto al 3 de setiembre de 1993
Universo	Argentinos, mayores de 18 años
Muestra y Cobertura geográfica	1600 casos. Capital Federal, Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Neuquén, Paraná, Olavarría, Tucumán Rural, Tucumán urbano, Bahía Blanca.
Técnicas de muestreo	Probabilística, domiciliaria, estratificada por sexo y nivel de urbanización
Margen de Error	2,4% en más o en menos con un nivel de confianza del 95%

La encuesta realizada por Mora y Araujo acerca del arancelamiento de las universidades nacionales y del proyecto de Ley de Régimen Económico Financiero que las faculta a tomar esta decisión reveló cifras contundentes.

En relación al proyecto de ley, **un 54% de los entrevistados se pronunció a favor del mismo, un 25% en contra y un 21% no sabe/no contesta.**

Del informe de la encuesta se desprende que:

- Este proyecto de ley obtiene una mayor aceptación en la medida en que se desciende en la escala social.
- Quienes manifiestan menor

grado de acuerdo con esta ley, en términos de su contacto con la universidad nacional son aquellas personas que cursan actualmente sus estudios en ella. En este segmento se genera aceptación y rechazo por partes iguales (48% en cada uno de los casos). El resto no responde.

Un tercio de la población que en principio dice que la universidad debe ser gratuita, manifiesta su acuerdo con el proyecto de ley (28%).

La oposición a la ley se traduce en mayor grado en una cuestión de principios, es decir: "la universidad debe ser gratuita"; antes que una cuestión ética es decir: "el Estado se quedará con los fondos o disminuirá su aporte económico".

I. Opinión Sobre el Arancelamiento de las Universidades Nacionales

Un 56% aproximadamente se pronunció en favor del arancel.

De éstos, aproximadamente un tercio de la población (31%) opina que se debe cobrar arancel, pero que se debe eximir del pago a los alumnos que no posean recursos económicos suficientes.

En Neuquén esta idea genera un mayor grado de apoyo.

En los estratos socio-económicos más bajos se manifiesta en mayor medida esta opinión.

Opinión respecto del proyecto de ley (en porcentajes)				
TOTAL	Nivel			
	Económico		Social	
	TOTAL 100%	BAJO 100%	MEDIO 100%	ALTO 100%
De acuerdo	54	42	53	67
En desacuerdo	25	9	25	30
No sabe/No responde	21	49	22	3

Un 10% de la población manifiesta que debe haber aranceles y que deben ser iguales para todos.

Esta opinión es sostenida en mayor grado a medida que asciende el nivel económico social.

En la provincia de Córdoba se opina en mayor grado de esta manera.

Un 15% de los entrevistados sostiene que se debe cobrar un arancel y que debe ser menor para quienes posean insuficientes recursos económicos.

Esta opinión es más fuerte a medida que se asciende en el nivel económico social.

Sólo un 36% considera que las Universidades Nacionales deben ser gratuitas sin excepción.

Sobre la fuente de financiamiento de las universidades el sondeo arrojó los siguientes resultados:

- 54% no responde

-23% a través de fondos del Estado

- 7% a través de Fondos Mixtos (Estado y Alumnos)

- 5% por aportes de los alumnos

II. Opinión sobre el Proyecto de Ley

Al ser consultados acerca del Proyecto de Ley de Régimen Económico- Financiero de las Universidades Nacionales, los resultados fueron los siguientes:

- Más de la mitad de los entrevistados manifestó su acuerdo (54%)

- Sólo se manifestó en desacuerdo (un 25% del total).

- 21% no responde.

Entre quienes manifiestan en principio que la universidad debe ser gratuita sin excepción un 28% manifiesta su acuerdo con el actual proyecto de ley, un 52% se opone y un 19% no sabe/no responde.

"El establecimiento de una ley que faculte a las universidades nacionales a establecer un arancel, eximiendo de pago a quienes no puedan afrontarlo y estableciendo un sistema de becas para cubrir los gastos de estudio de los estudiantes con menores recursos, genera un considerable apoyo en la opinión pública".

III. Motivos de aprobación y desaprobación de la Ley

Entre quienes aprueban la Ley, una amplia mayoría (80%) está

de acuerdo con la afirmación que sostiene que el arancelamiento es un tema que debe discutirse en cada universidad y es en los niveles socioeconómicos y educativos más elevados donde se manifiesta un mayor grado de acuerdo con esta afirmación.

Un 91% de quienes aprueban el proyecto de ley apoya la afirmación que sostiene que los que pueden pagar deben hacerlo y esta afirmación recoge más apoyo entre quienes pertenecen a los niveles socioeconómicos más bajos.

Un 95% de quienes aprueban el proyecto está de acuerdo con que a través de un sistema de becas debe garantizarse la igualdad de oportunidades.

Un 85% de quienes desa-

prueban el proyecto de ley están de acuerdo con la afirmación de que la universidad nacional debe ser gratuita.

En los sectores socioeconómicos medio y medio alto esta afirmación recibe una mayor aprobación.

Sólo un 55% de quienes desaprueban la ley está de acuerdo con que si ésta se sanciona, el Estado disminuirá su aporte económico.

A medida que asciende el nivel económico social esta creencia es más fuerte.

Un 65% de quienes desaprueban la ley duda de quienes administraran los fondos del arancelamiento y su destino.

Los segmentos socio-

económicos más altos manifiestan la actitud de mayor desconfianza en este sentido.

Sólo un 23% manifiesta que no está de acuerdo con la ley porque se debería autorizar a las universidades a arancelar y no facultarlas a hacerlo.

En síntesis, los resultados del sondeo, determinan, según los especialistas, la siguiente conclusión:

"El establecimiento de una ley que faculte a las universidades nacionales a establecer un arancel, eximiendo de pago a quienes no puedan afrontarlo y estableciendo un sistema de becas para cubrir los gastos de estudio de los estudiantes con menores recursos, genera un considerable apoyo en la opinión pública".▲

NIVEL DE EDUCACION ALCANZADO

	TOTAL NINGUN		PRIMARIA		SECUNDARIA		TERCIARIA		UNIVERSITARIA	
	100% 100%		INCOM. COMP.		INCOM. COMP.		INCOM. COMP.		INCOM. COMP.	
			100% 100%		100% 100%		100% 100%		100% 100%	
Total										
NS/NR	21	63	41	30	20	12	6	3	8	3
De Acuerdo	54	23	44	49	57	61	48	69	56	60
En Desacuerdo	25	14	14	21	22	27	45	28	36	37

Programa

Incentivos para los Docentes Investigadores

En el marco de la creciente importancia otorgada a la Educación Superior y del compromiso por una mejor calidad del sistema universitario, a fines de 1993 se puso en marcha el Programa de Incentivos a docentes universitarios que participen en proyectos de investigación.

Este programa, que fuera elaborado por la Secretaría de Políticas Universitarias con la participación y consenso del Consejo Interuniversitario Nacional, se fundamenta en la necesidad de promover el desarrollo de la carrera académica en las Universidades Nacionales en el marco de un enfoque integrado (docencia, investigación, extensión y gestión).

**EL MINISTERIO DE
CULTURA Y EDU-
CACIÓN RECONOCE
EL ESFUERZO DE
LOS DOCENTES
INVESTIGADORES DE
LA UNIVERSIDAD
ESTATAL, MEJORAN-
DO SUS INGRESOS.
EN 1993, SE CREA
POR MEDIO DEL
DECRETO 2427/93 EL
PROGRAMA DE
INCENTIVOS A LOS
DOCENTES
INVESTIGADORES**

Por otra parte, implica la consideración de :

- Que en el marco del paradigma científico-tecnológico dominante a escala mundial, basado en la microelectrónica, la biotecnología y los nuevos materiales, las universidades son destacados protagonistas en la investigación científica.
- Que en el campo de las ciencias sociales las universidades concentran la mayor capacidad instalada de recursos humanos para desarrollar tareas analíticas tendientes al diagnóstico e interpretación de los fenómenos sociales.
- Que la creación de un incentivo a los docentes de

"(...)esta
iniciativa se
inscribe en un
enfoque de
asignación de
recursos a las
universidades en
función de
programas
específicos
basados en
criterios
objetivos que
favorezcan el
rendimiento del
trabajo
académico."

las universidades nacionales que participen en proyectos de investigación, contribuirá en forma simultánea a aumentar las tareas de investigación y desarrollo a nivel nacional, fomentar la reconversión de la planta docente, motivando una mayor dedicación a la actividad universitaria y a la creación de grupos de investigación.

- Que es necesaria la constitución de grupos de investigación en las universidades más jóvenes, para lo cual es conveniente impulsar el desarrollo de proyectos de investigación interuniversitarios con la participación de docentes de distintas Universidades Nacionales.

- Que el incentivo significará una mejora en los ingresos de los docentes universitarios durante el período en que

participen en proyectos de investigación.

Es importante destacar que en el marco de la constante preocupación por la calidad y la excelencia que guía a esta gestión. La iniciativa se inscribe en un enfoque de asignación de recursos a las universidades en función de programas específicos basados en criterios objetivos que favorezcan el rendimiento del trabajo académico.

En términos económicos el Programa de Incentivos alcanza en 1994 un monto de \$42 millones.

A su vez, la mejora en las remuneraciones de los docentes según categoría y dedicación es del orden de un 40%.

En el cuadro se presenta el valor del incentivo. ♠

Valor del Incentivo

Año 1994

Decreto 2427/93

Categoría Equivalente de Investigación	DEDICACION A LA INVESTIGACION *		
	1	2	3
	(1/2 Tiempo ó más) ** \$	(1/4 tiempo)** \$	(1/8 tiempo)** \$
DOCENTE - INVESTIGADOR A	1.050,00	420.00	175,00
DOCENTE - INVESTIGADOR B	700,00	280,00	115,50
DOCENTE - INVESTIGADOR C	420.00	168,00	70,00
DOCENTE - INVESTIGADOR D	280,00	112,00	45,50

* Según dedicación docente

** Tomado con relación a la dedicación exclusiva

INCENTIVO A DOCENTES INVESTIGADORES

Año 1994

UNIVERSIDADES	NUMERO DE INCENTIVADOS
Catamarca	103
Centro	389
Comahue	207
Cordoba	860
Cuyo	541
Entre Ríos	49
Formosa	79
Jujuy	58
La Matanza	51
La Pampa	191
La Patagonia	33
La Plata	1519
La Rioja	21
Litoral	532
Lomas Zamora	30
Lujan	177
Mar del Plata	584
Misiones	167
Nordeste	187
Quilmes	33
Río Cuarto	466
Rosario	651
Salta	329
San Juan	273
San Luis	338
Sgo. del Estero	81
Sur	406
Tecnológica	32
Tucumán	572
UBA	2351
TOTAL	11356

Nota: Las cifras estan sujetas a ligeras variaciones con relación a la segunda convocatoria

Programa de Crédito Universitario

Con el propósito de facilitar a los estudiantes universitarios que cursan los dos últimos años de su carrera en universidades nacionales y provinciales, la conclusión de sus estudios, la Secretaría de Políticas Universitarias gestionó un convenio entre el Ministerio de Cultura y Educación y el Banco de la Nación Argentina, para desarrollar el Programa de Crédito Universitario, dirigido prioritariamente a los estudiantes de ciencias básicas y tecnológicas.

Dicho programa se encuentra en vigencia durante el año 1994 y pone a disposición de dichas universidades 2000 créditos subsidiados por el Ministerio de Cultura y Educación, con el objeto de reducir los costos financieros y hacerlos más accesibles a los alumnos que reúnan las condiciones de rendimiento académico, regularidad en el curso de la carrera y necesidad económica, requeridas por el mismo Ministerio.

En el cuadro adjunto se ilustra, para diferentes montos de crédito, las cuotas de amortización e intereses a cargo de los beneficiarios y el correspondiente a la Secretaría de Políticas Universitarias.

Cabe aclarar que la devolución del crédito se inicia a los seis meses luego de la fecha de graduación del estudiante.

El programa de créditos es aplicado por las universidades, quienes seleccionan y certifican al banco la idoneidad de los alumnos que solicitan el crédito, de acuerdo a los requisitos mencionados.

La aplicación de dicho programa ha dado como resultado la presentación de 1214 solicitudes hasta el 30 de Julio de 1994, que se distribuyen según el cuadro anexo. ♠

PROGRAMA DE CREDITO UNIVERSITARIO	
Universidades	Número de Créditos Al 30-08-94
Catamarca	30
Centro	37
Comahue	9
Córdoba	27
Cuyo	165
Entre Ríos	25
Formosa	0
Jujuy	31
La Matanza	0
La Pampa	11
La Plata	81
Litoral	34
Lomas Zamora	5
Luján	0
Mar del Plata	67
Misiones	71
Nordeste	151
La Patagonia	10
Quilmes	6
Río Cuarto	50
Rosario	17
Salta	15
San Juan	176
San Luis	43
Sgo. del Estero	8
Sur	62
Tecnológica	27
Tucumán	116
UBA	49
TOTAL	1.323

Cuadro 1

Beneficiarios	Estudiantes a quienes resten dos años de su carrera	Estudiantes a quienes resten dos años de su carrera
Monto del Crédito	\$ 6.000,00	\$ 3.000,00
Desembolso	4 cuotas iguales por semestre adelantado	2 cuotas iguales por semestre adelantado
Período de gracia	29 meses (1)	17 meses (1)
Cuotas de amortización (2)		
1-6	\$ 242,93	\$ 109,93
7-12	\$ 283,42	\$ 128,25
13-25	\$ 404, 88	\$ 183,22

Cuadro 2

La Secretaría de Políticas Universitarias en el Vº Saló de l'Ensenyament de Barcelona, España.

Desde hace cinco años la Generalitat de Catalunya organiza una Exposición Educativa denominada "Saló de l'Ensenyament".

Esta muestra oficial adquirió año tras año mayor envergadura, al punto de convertirse en un evento internacional.

La Exposición se caracteriza por brindar a los estudiantes y docentes de todos los niveles de la enseñanza, la información actualizada en lo referente a modificaciones curriculares, actualización bibliográfica, oferta de estudios de escuelas y universidades, así como también por realizar intercambios sobre temas educativos con otras regiones de España y con Europa y el resto del mundo.

La importancia que la muestra tiene, la da la presentación que hace de ella el *Conseller de l'Ensenyament*, Joan M. Pujals i Vallve, en la que dice que "(...) una buena formación de base tanto en los aspectos culturales como en los científicos y tecnológicos, junto con una formación especializada y permanente en el ámbito profesional

El caudal de visitantes a nuestro Stand fue de alrededor de 100 personas por día. Las consultas más reiteradas tuvieron que ver con las siguientes disciplinas: Química, Odontología, Ingeniería, Humanidades y Ciencias Sociales.

que cada uno haya escogido, es indispensable." (...) "El Saló de l'Ensenyament, en estos años ha devenido un punto de referencia obligada en el curso académico y ha pasado a formar parte del sistema educativo de nuestro país" En ese marco, y recogiendo la demanda del año 1993, la Generalitat de Catalunya invitó a la República Argentina para que expusiera la oferta universitaria.

La Exposición - que se realizó del 2 al 9 de mayo - contó con más de 150.000 visitantes, que pueden ser agrupados en 4 categorías:

- 1) Estudiantes de colegios primarios (último año) que demandaban por opciones para el segundo nivel de enseñanza.
- 2) Estudiantes del COU (Curso de Orientación Universitaria), que demandaban por opciones de ingreso a la Universidad.
- 3) Estudiantes universitarios que solicitaban información sobre cursos de posgrado. Sobre esta franja veremos luego el porcentaje de demanda para el Sistema

Universitario Argentino.

4) Docentes que requerían información para dar orientación a sus estudiantes:

Nuestro Stand -15m2- fué muy visitado, sobre todo por estudiantes universitarios que requerían información sobre cursos de posgrado. La composición de los mismos se repartió entre españoles con expectativas de cursar algún posgrado en Argentina, y argentinos o hijos de argentinos con posibilidades de retornar al país y cursar o continuar sus estudios universitarios.

Hubo fuerte preocupación por averiguar sobre reválidas de títulos.

El caudal de visitantes a nuestro Stand fue de alrededor de 100 personas por día. Las consultas más reiteradas tuvieron que ver con las siguientes disciplinas: Química, Odontología, Ingeniería, Humanidades (Historia y Psicología), Ciencias Sociales (por ejemplo: Trabajo social, Sociología, Administración, Turismo, etc.) - Para contestar todas las preguntas formuladas la Secretaría de

Políticas Universitarias contó con una base de datos ad-hoc que, informaba acerca los posibles estudios de grado y posgrado en cada disciplina y las Universidades que los dictan.

El Stand se completó con la exposición de material gráfico de las Universidades Nacionales -que el público podía consultar-, la proyección de un video institucional y el afiche de la Secretaría de Políticas Universitarias.

Otra actividad importante llevada a cabo por nuestra Delegación fue la charla sobre "Las Políticas Universitarias en Argentina", ofrecida por el Sr. Subsecretario de Programación y Evaluación Universitarias, Lic. José Pagés Giribet, que se extendió por espacio de casi dos horas debido a la cantidad de preguntas formuladas, y que fue además auspiciada por el Consulado Argentino en Barcelona.

Además de nuestro país, estuvieron representados: Japón, Australia, Polonia, Francia, México, Bélgica, Italia, España, Rumania, Túnez, Grecia, etc.

Aquí también es posible diferenciar 3 grupos:

- Representación oficial de los Ministerios de Educación.
- Representación de Colegios y Universidades.
- Representación de grupos editoriales ligados a la educación.

Nuestro Stand recibió la visita del Señor Presidente de la Generalitat de Catalunya, Don Jordi Pujol, quien fue recibido por la señora Cónsul General Adjunta de Argentina en Barcelona, Dra. Estela Pelaez Ayerra, y por nuestra delegación.

Por último, cabe agregar que hemos recibido el auspicio de nuestra Cancillería, el apoyo personal e institucional del Consulado Argentino en Barcelona y la ayuda de la Organización del Vº Saló para que nuestra Secretaría de Políticas Universitarias estuviera representada con éxito.

Lic. Ana María Zagari

Asesora de la Secretaría de Políticas Universitarias

(1) Párrafo de la presentación del libro editado por el Vº SALÒ DE L'ENSENYAMENT. CATALUNYA, 1994.

Informe

El Consejo Interuniversitario Nacional y el Ministerio de Cultura y Educación

Desde su constitución, la Secretaría de Políticas Universitarias a través de su titular, el Licenciado Juan Carlos del Bello, ha establecido una relación fluida y estable con el Consejo Interuniversitario Nacional reconociendo a los rectores como los legítimos representantes de la comunidad universitaria - ya que son elegidos democráticamente por sus miembros- en la hora de la consulta y del debate.

El Licenciado Del Bello asistió a todas las reuniones plenarias del CIN, como miembro con voz y sin voto, llevando las inquietudes del Poder Ejecutivo en materia de política universitaria y promoviendo un debate del que la Universidad solo puede resultar favorecida.

En la búsqueda de las soluciones logradas por consenso, se ha perfilado una nueva relación entre la cartera educativa y las autoridades universitarias, aún en las diferencias.

Diferencias que innevitablemente han de subsistir porque resulta imposible la unanimidad de criterios ya que el modelo de universidad que nuestro país necesita no debe imponerse con un criterio de uniformidad, sino que por el contrario: debe ser la expresión de la diversidad institucional, que es la expresión misma de nuestra diversidad cultural y social.

Dicha conducta se vio reflejada en el acuerdo que el Ministerio de Cultura y Educación a través de su Secretaría de Políticas Universitarias, celebrara con el CIN el 15 de diciembre de 1993.

ASPECTOS SOBRESALIENTES DEL ACUERDO ENTRE EL MINISTERIO Y EL CIN

El 8 de diciembre del año 1993, el Secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Cultura y Educación, Juan Carlos Del Bello y el entonces presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Fortunato Daher, firmaron un acuerdo -rubricado también por todos los rectores- en lo que hace a determinados aspectos de los Proyectos de Ley de Educación Superior y de Régimen Económico-Financiero de las Universidades Nacionales.

Los aspectos más relevantes del acuerdo fueron:

1) Que el Proyecto de Ley de Educación Superior incluyera:

- La creación de un organismo estatal encargado de la evaluación externa periódica de la calidad de la educación en las universidades.
- La mayor representación relativa de los profesores en los órganos colegiados de gobierno de las universidades nacionales.
- Que la intervención de las universidades nacionales sólo puede ser dispuesta por ley del congreso y por tiempo determinado.
- Que se prohíba el ingreso de las fuerzas policiales a los locales universitarios si no es solicitado por sus autoridades.

2) Que el Proyecto de Ley de Educación Superior y el de Régimen Económico-Financiero, deberán garantizar la máxima autarquía económico-financiera para la gestión y administración de las universidades.

3) Elaborar un nuevo Régimen Laboral Docente Unico para todas las universidades nacionales que contemple la transformación de la dedicación simple y las obligaciones de los docentes de dedicación exclusiva y semiexclusiva. Para lo cual se acuerda constituir una comisión mixta que elabore el mencionado Régimen Laboral Docente Unico para todo el país.

4) Que el proyecto de Ley de Educación Superior y el de Régimen Económico-Financiero se tratarán en forma conjunta.

Por otro lado, y en virtud de no existir un consenso unánime, no fue incorporada al acuerdo ninguna cláusula en lo que hace a las contribuciones estudiantiles para la enseñanza superior de grado.

Cabe aclarar que con respecto a este tema la posición del Poder Ejecutivo es *facultar a las universidades a decidir en cada caso particular: esto es; no obligar pero tampoco prohibir a que se pronuncien sobre las contribuciones estudiantiles.* ♠

EL CIN Y EL MCyE

EL CIN Y EL PROYECTO DE LEY DE EDUCACION SUPERIOR

El XXVI Plenario de Rectores acordó constituir una Comisión entre el CIN (representado por los rectores de las Universidades de Buenos Aires, Nacional de Cuyo, Nacional del Centro y Nacional de la Patagonia) y el Ministerio de Cultura y Educación; para avanzar en el análisis conjunto del Proyecto de Ley de Educación Superior elevado por el Poder Ejecutivo de la Nación al Congreso con el objetivo de buscar consenso en la mayor cantidad de temas posibles. Dicha comisión habría de concluir su tarea el 30 de junio del corriente año. Asimismo, se solicitaría audiencia a las presidencias de las Comisiones de Educación de las Cámaras de Senadores y Diputados para expresar las opiniones del cuerpo.

Entre los considerandos tenidos en cuentas en esta resolución se reconoce que el proyecto contiene "muchos aspectos convenientes" y que se han recogido en él los puntos contenidos en el acuerdo del 8 de diciembre de 1993 y sugerencias hechas por el CIN.

Asimismo, y en vista de las divergencias que surgen vinculadas a otros aspectos y de la voluntad expresada por el Ministerio de Cultura y Educación para conformar un espacio de discusión con la intención de buscar consensos en los puntos de disidencia, se decide formar la mencionada comisión mixta.

EL MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION INFORMO A LOS RECTORES SOBRE LA EVALUACION EDUCATIVA.

A la delegación oficial encabezada por el titular de la Secretaría de Políticas Universitarias, Lic. Juan Carlos Del Bello, que asistió a las deliberaciones del plenario que se realizara en la ciudad de Jujuy en febrero del corriente año, se sumó esta vez el Lic. Horacio Santángelo, Subsecretario de Evaluación de la Calidad Educativa. El Lic. Santángelo informó a los Rectores de las universidades nacionales sobre la evaluación nacional realizada a fines del año 1993 a estudiantes de 7° grado (nivel primario) y de 5° año (nivel medio) y cuyos resultados se hicieran públicos en esa oportunidad.

EL CIN Y EL MCyE

EL MINISTRO JORGE RODRIGUEZ RECIBIO A LA CONDUCCION DEL CIN.

El 5 de noviembre del año 1993, el Ministro de Cultura y Educación recibió en su despacho al Presidente y Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional, acompañados por el titular de la Secretaría de Políticas Universitarias, Lic. Juan Carlos Del Bello.

En la oportunidad, expusieron ante el titular de la cartera su opinión sobre el proyecto de Ley del nuevo Régimen Económico Financiero para las Universidades Nacionales. Durante el transcurso de la reunión, los rectores manifestaron distintos criterios sobre el controvertido tema de las contribuciones estudiantiles para los estudios de grado, reflejando la diversidad institucional de nuestro sistema de educación superior.

Como consecuencia de este encuentro, el ministro Rodríguez envió una nota al titular de la Comisión de Educación del Congreso de la Nación, en la que expresa textualmente:

"...Convencidos que la autonomía universitaria es un valor que debemos cuidar celosamente, porque hace a la esencia misma de la universidad, el proyecto de Ley de Régimen Económico-Financiero persigue el propósito de profundizar la autarquía económica financiera. De tal manera transmito por su intermedio, al Honorable Congreso de la Nación, lo que manifestáramos a los rectores en esta oportunidad: apoyamos toda iniciativa de modificación del proyecto que signifique profundizar la autarquía, en el contexto de la legislación general vigente. A la vez, no estamos de acuerdo con ningún tipo de prohibición o limitación al ejercicio de la autonomía universitaria en materia económico-financiera."

Decreto 2330

Funcionamiento de Universidades Privadas

El Ministro de Cultura y Educación de la Nación, Ing. Jorge Rodríguez, refrendó el 11 de Noviembre de 1993 el nuevo decreto reglamentario de la Ley 17.604 de Universidades Privadas (decreto 2330).

Como consecuencia del crecimiento de la demanda por educación superior, aumentaron las iniciativas privadas de creación de nuevas universidades. Por ello y hasta que se sancione la nueva ley universitaria, el Poder Ejecutivo Nacional resolvió modernizar el marco regulatorio de las universidades privadas en el contexto de la Ley 17.604.

La cartera educativa, responsable de otorgar autorización a los nuevos establecimientos universitarios de gestión privada, actuará sobre la base de garantizar la calidad académica y la consistencia de la propuestas.

Al respecto, se amplían los recaudos relativos a la calidad y excelencia de las iniciativas. Una de las exigencias para las nuevas instituciones será presentar un informe anual donde consten los avances

realizados con respecto al plan de desarrollo quinquenal aprobado.

Asimismo, se modificarán los requerimientos que regulan el funcionamiento de universidades ya consolidadas.

El Ministro de Cultura y Educación de la Nación,
Ing. Jorge Rodríguez,
refrendó el 11 de noviembre de 1993 el nuevo decreto reglamentario de la Ley 17.604 de Universidades Privadas (Decreto 2330).

En este sentido, se amplía la autonomía de las universidades privadas de vieja data, liberando a sus egresados, por ejemplo, de las pruebas finales de capacidad profesional. A partir del nuevo

reglamento, dichas universidades no requerirán autorización previa para reformar sus estatutos académicos y sus planes de estudio. También podrán expedir diplomas sin intervención previa del Ministerio de Cultura y Educación, y tendrán como requisito para su validez la autenticación de las firmas de quienes los expidan.

Todo esto, irá acompañado por la obligación de informar periódicamente sobre los resultados académicos alcanzados y la investigación científica, implementando procedimientos de evaluación externa y autoevaluación.

La transformación del Sistema Universitario, ya iniciada en el subsistema de Universidades Nacionales, se extendió con esta medida al subsistema de Universidades Privadas.

Reglas claras, transparentes, que garanticen igualdad de oportunidades y una especial preocupación del Poder Ejecutivo Nacional por la Calidad y la Excelencia de las Universidades argentinas, sean estas estatales o privadas. ▲

MARCO REGULATORIO PARA UNIVERSIDADES PRIVADAS

El decreto modificatorio de la reglamentación de la ley 17.604 que regula el funcionamiento de las universidades privadas, constituye una reforma sustancial al marco regulatorio vigente. Cuando se sancione la nueva Ley de Educación Superior, será posible ampliar la reforma que se iniciara con esta reglamentación. Los principales aspectos de la reforma y su fundamentación son los siguientes:

El decreto
modificatorio de
la reglamentación
de la ley 17.604
que regula el
funcionamiento de
las universidades
privadas,
constituye una
reforma sustancial
al marco
regulatorio
vigente.

(1) Se levanta la barrera al ingreso de nuevas Casas de Altos Estudios de gestión privada, al derogarse el decreto 451/73, por el cual se suspendieron los trámites para la creación de universidades privadas.

(2) Se introducen requisitos académicos más exigentes para la autorización de la apertura de nuevas universidades. El anterior régimen enfatizaba requisitos vinculados a la pertinencia de la oferta educativa (por ejemplo, se trataba de responder a interrogantes tales como: ¿hacen falta más médicos?); la reforma se interroga sobre la calidad intrínseca de la propuesta (el plantel de profesores, las instalaciones, etc.). Este cambio se fundamenta en el hecho de que el Estado debe cautelar la fe pública depositada en las instituciones universitarias y proteger a los usuarios (los alumnos, sus padres y la comunidad en general), más aún cuando la obtención de un título universitario automáticamente habilita para el ejercicio profesional.

(3) Se eliminan (desregulación) múltiples trámites de las universidades privadas con autorización definitiva y liberadas de las pruebas finales de capacidad profesional (ello significa más de 20 años de existencia), ante el Ministerio de Cultura y Educación, asimilando dichas universidades al régimen de las Universidades Nacionales, sin que ello signifique la pérdida

de la atribución de fiscalización del Ministerio. Para ilustrar, actualmente el M.CyE. firma los títulos que otorgan las universidades privadas, para lo cual recibe un legajo completo de los egresados. Esta rutina se elimina, pero al mantenerse la atribución de fiscalización el Ministerio verificará mediante muestreo que los títulos se hayan otorgado con arreglo a las disposiciones vigentes; en caso contrario se aplicará el régimen de sanciones previsto que incluye hasta la clausura.

(4) Se introduce la evaluación de la calidad, con carácter obligatorio, para todas las universidades privadas independientemente de su antigüedad, la que se aplicará cada cinco años y que considera como elemento central la evaluación externa, con el propósito de asegurar niveles satisfactorios de calidad.

En otras palabras, se modifica sustancialmente el papel del Estado: se eliminan trámites que no tienen efectividad y se incorpora el control de calidad.

Esta reforma es transitoria, regirá hasta que se sancione la nueva Ley de Educación Superior, que seguramente profundizará este rumbo, y forma parte de una política global universitaria que incluye el planeamiento, la reestructuración de las Universidades Nacionales y la ampliación y diversificación de una oferta de Educación Superior, de alta calidad y excelencia, que satisfaga una demanda creciente y exigente. ♣

Programa de Créditos del Banco Mundial para las Universidades Nacionales

*En varias
oportunidades,
visitó Buenos
Aires una
misión del
Banco Mundial
que mantuvo
una serie de
reuniones con
el equipo
técnico de la
Secretaría de
Políticas
Universitarias,
con el objeto de
preparar un
programa de
préstamos para
universidades
públicas
argentinas.*

El programa de créditos se inscribirá en el plan global de reforma estructural del sistema universitario que incluye: capacitación docente, desarrollo del sistema de posgrado, fortalecimiento de las ciencias básicas e ingenierías y apoyo a proyectos de reforma global de universidades medianas.

Nueve universidades medianas han mostrado interés en participar en el programa y se encuentran preparando la documentación requerida para poder hacerlo.

Por su parte, una misión del Banco Mundial visitó las sedes de cuatro de ellas: San Luis, Mar del Plata, Sur y Patagonia San Juan Bosco.

El programa está siendo preparado y el Ministerio de Cultura y Educación estima que los primeros desembolsos financieros se harán efectivos a partir del año 1995 y por un período de 4 años. El monto

estimativo del crédito, ascendería a 150 millones de dólares, iniciando los desembolsos a partir de la segunda mitad de 1995, una vez definidos y aprobados los proyectos de inversión que presentarán las distintas universidades.

La asignación del crédito que otorgaría el Banco Mundial, que constituye la primera asignación externa que se destinaría al área universitaria en los últimos treinta años, se ajusta a una serie de prioridades ya establecidas con las autoridades del organismo internacional.

El crédito, al mismo tiempo que incrementa los recursos financieros para las universidades, contribuirá a la reforma estructural del sistema, en especial en el área de las ciencias básicas y tecnológicas, y el desarrollo del sistema de posgrado.

La selección de universidades

**El crédito
constituirá la
primera
operación
que el Banco
Mundial
destina al
área
universitaria
en América
Latina.**

medianas realizada, comprende una decena de casas de estudio, cuyo promedio anual de inscriptos oscila entre 2500 y 5000 estudiantes.

Dichas universidades concentrarán su esfuerzo en la realización de obras de infraestructura y de programas de capacitación docente. Se promoverá además el análisis de cambios en el gerenciamiento, la gestión y la administración de las casas de estudio, tendientes a mejorar los indicadores de la calidad de la enseñanza.

Las mediciones, se corresponderán con la duración efectiva de las carreras, la relación entre docentes y alumnos y la superficie destinada a laboratorios.

La cesión del crédito constituirá la primera asignación que el Banco Mundial destina al área universitaria en América Latina. La misión del Banco Mundial

que nos visitara ha estado integrada por los siguientes expertos: William Experton, coordinador de misión; Huguette Haugades-Rodríguez, administradora del Ministerio de Enseñanza Superior de Francia; Jean Clause Martin, presidente de la Universidad Toulouse P. Sabatier (Francia); Douglas Albretch, economista de la Universidad de Harvard y Hideki Mori, experto de la región de América Latina y el Caribe.

Por su parte el equipo técnico del Ministerio de Cultura y Educación que participó en las reuniones para este proyecto ha estado integrado por los Licenciados Alberto Federico y Rodolfo Brioso, la Doctora Rebeca Guber, el Doctor Héctor Gertel y las Licenciadas Marta Borda y María Guzmán. ♠

INCUMBENCIAS PROFESIONALES

La sanción del
Decreto N°
256/94
constituye un
cambio
trascendente en
el marco
regulatorio
para el
otorgamiento
de validez
nacional de
títulos
universitarios y
la
determinación
de
incumbencias
profesionales.

A partir de ahora el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación sólo fijará incumbencias para las profesiones que comprometen el interés público, poniendo en riesgo la salud, la seguridad, los bienes y los derechos de los habitantes. Con ese propósito el Ministerio determinará de manera restrictiva la nómina de los títulos que así lo exijan.

El término incumbencias apareció recién hace dos décadas en la literatura oficial, pedagógica y profesional. En español y varios idiomas, significa estar a cargo de una cosa. Curiosamente en nuestro país, para los fines aludidos, el término adquirió la acepción antinómica de atributo o derecho o privilegio, generando su adopción un mecanismo conflictivo de privilegios.

Emilio F. Mignone, en un trabajo reciente e inédito, preparado para el Consejo Nacional de Educación Superior, analiza por primera vez y de manera exhaustiva esta curiosa invención argentina, nacida entre 1975 y 1980 y señala sus consecuencias perniciosas.

El origen de la fijación de incumbencias por parte del Estado se vincula con el tema de la habilitación profesional, en relación con las carreras que comprometen

el interés público (salud, justicia, seguridad). Surge originariamente a partir de 1955 con el reconocimiento de universidades privadas. Hasta entonces y desde mediados del siglo XIX, siguiendo la legislación francesa, la habilitación profesional es otorgada por las universidades nacionales junto con el grado académico, sin tener en cuenta la competencia exclusiva del Estado para dicha materia. Sin encarar el fondo del problema, apareció entonces el sustituto de las incumbencias, primero sólo para las universidades privadas (1975) y luego para todos los establecimientos universitarios (1980). Este criterio fue aceptado sin mayor examen por la legislación vigente, sancionada en 1984 después de la restauración de la democracia y por las universidades nacionales, pese a la restricción a sus atribuciones que ello supone. Pero lo llamativo es que la determinación de las denominadas incumbencias se extendió innecesariamente para los diplomas que nada tienen que ver con las profesiones reglamentadas por el Estado, creándose de esa manera un frondoso e inútil conjunto de normas que conspiran contra la necesaria libertad de la tarea académica y científica.

Alimentó el imaginario para la obtención de privilegios, la

Con el Decreto
256/94, el
Ministerio de
Cultura y
Educación
abandona la
pretensión de
fijar
incumbencias a
los cultores de
las ciencias y las
artes, deja en
libertad a la labor
científica y
académica de las
universidades,
ampliando y
garantizando con
ello la autonomía
universitaria.

constitución de corporaciones profesionales y la defensa por parte de éstas del territorio de actividad profesional que se consideraba reservado por las incumbencias, o sea un derecho exclusivo establecido por la autoridad pública para realizar determinadas tareas profesionales. De esa manera se intentó prohibir absurdamente a otros egresados universitarios, capacitados para ello, la realización de las tareas incluídas en las incumbencias, limitando la sana competencia profesional.

En vez de resolverse racionalmente la distinción entre título académico y habilitación profesional se introdujo un vocablo nuevo, mal interpretado lexicográficamente, por el cual el Estado reguló el ejercicio de las profesiones que no requieren y hasta repelen, por sus características, esa pretendida protección.

En la práctica este propósito funcionó limitadamente. Nadie que contrata a un economista, sociólogo, biólogo, ingeniero, agrónomo, lo hace en virtud de sus incumbencias, sino de sus capacidades. Los empleadores ignoran las incumbencias definidas a través de un farragoso sistema burocrático y administrativo.

Mignone se interroga, caricaturizando, ¿que sentido tiene determinar que un sociólogo posee la capacidad y la exclusividad de analizar la sociedad, un politólogo el Estado, un economista la economía y un antropólogo grupos humanos? ¿O un matemático relacionar abstracciones, un físico medir, un químico transformar la materia, un músico componer piezas y un filósofo meditar sobre todo lo divino y humano? ¿O acaso quienes no somos sociólogos, politólogos, economistas, antropólogos, físicos, químicos o filósofos tenemos prohibido incursionar en esas ciencias y artes? Lo ridículo, sin embargo, no provoca risa cuando se advierte que los ingenieros agrónomos tienen dificultades para trabajar en la industria alimenticia en Mendoza o los ingenieros civiles pugnan con los agrimensores en Córdoba.

Con el Decreto 256/94, el Ministerio de Cultura y Educación abandona la pretensión de fijar incumbencias a los cultores de las ciencias y las artes, deja en libertad a la labor científica y académica de las universidades, ampliando y garantizando con ello la autonomía universitaria. ▲

Opinión

LA AUTONOMIA EN DEBATE

Por Eduardo Sánchez Martínez

El proyecto de Ley de Educación Superior que el Poder Ejecutivo Nacional elevara recientemente al Congreso, parece estar planteando algunos interrogantes en torno a las razones y a los alcances de la *autonomía universitaria*, esa característica institucional tan celosamente defendida por las mismas universidades, como frecuentemente cuestionada, sobre todo en estos tiempos difíciles, por distintos poderes extra-universitarios.

Las razones de ese status institucional tan singular, en mi opinión no debieran plantear a esta altura de los tiempos mayores interrogantes. Porque la autonomía es, como cualquier universitario sabe, un rasgo central verdaderamente constitutivo de la institución a la que pertenece. Se sabe que ella consiste en la atribución o competencia que la ley le confiere para darse sus propias normas, para tener su propio gobierno y para manejarse por sí misma. El Estado delega esas facultades en las instituciones universitarias, limitando al mismo tiempo la intervención directa del gobierno estatal en los asuntos delegados, aunque no queden por ello exentas del necesario control de legalidad y de gestión. La autonomía, por lo tanto, es básicamente una característica de las

Eduardo Sánchez
Martínez, Asesor de
la Secretaría de
Políticas
Universitarias,
Profesor de las
Universidades de
Córdoba y Río
Cuarto, conocedor a
fondo del Proyecto
de Ley de Educación
Superior que hoy se
trata en el Congreso,
analiza el tema de la
Autonomía
universitaria en
profundidad.

instituciones, y no se confunde con la libertad académica ni con la democracia intra-institucional. Sin embargo, es allí, en la necesidad de *crear un ámbito donde sea posible el desarrollo del pensamiento crítico e independiente*, sin los condicionamientos que tanto el poder político como otros poderes de la sociedad podrían imponerle, que la autonomía encuentra su principal justificación. Sin ese resguardo institucional, la libertad de cátedra y la libertad de investigación, propias de una sociedad democrática, e indispensables para que ésta en verdad lo sea, se verían pronto limitadas o cercenadas, y la noción misma de universidad se vería cuestionada. Sin embargo, aunque la distinción entre autonomía institucional y libertad individual es nítida, sucede que suelen ir juntas, y sobre todo, que la ausencia de una a menudo acompaña la ausencia de la otra.

Mucho más justificado y saludable me parece el interrogante sobre *los alcances* de la autonomía. Porque su justificación, o sus justificaciones, tanto o más válidas y necesarias hoy que en otros momentos de la historia, llevan también aparejada la posibilidad de su absolutización, que suele conducir en los hechos

"la autonomía universitaria se sostiene solamente si va acompañada de una correlativa responsabilidad pública por los resultados de su acción, que sea capaz de poner por encima de los intereses corporativos las exigencias del interés general"

a una universidad que, más que al interés general, termina atendiendo a sus propios fines e intereses como corporación. Frente a esa concepción un tanto absoluta de autonomía, que a la larga lleva a que las propias instituciones universitarias entren en un proceso de creciente deterioro y desprestigio ante la sociedad, se está extendiendo la idea de que en un mundo cada vez más complejo, difícil e interdependiente, la autonomía universitaria se sostiene socialmente si va acompañada de una correlativa responsabilidad pública por los resultados de su acción, que sea capaz de poner por encima de los intereses corporativos las exigencias del interés general. Y estas exigencias, en el campo que aquí nos ocupa, se resumen hoy en un mejor desempeño institucional, que haga una mejor utilización de los recursos que la sociedad pone a su disposición, no como un fin en sí mismo, sino en vistas a lograr resultados de mayor nivel, relevancia y calidad. Sólo así -se ha dicho con razón- la autonomía universitaria podrá sostenerse, porque concebida de ese modo no es obstáculo sino presupuesto y condición para alcanzar esos mejores resultados.

Claro que esto implica también

plantear de otro modo el rol del Estado en la materia, que en el pasado parece haber oscilado entre desentenderse casi totalmente de lo que las universidades hacen o atender a su accionar desde un rígido y estéril control burocrático.

Aunque el proyecto que ahora se discute ha generado una comprensible y saludable polémica en esta materia, pareciera querer situarse entre esos dos extremos. Porque reconoce expresa y claramente el valor de la autonomía institucional y de la libertad académica, a las que amplía en puntos importantes y rodea de tradicionales garantías. Pero al mismo tiempo, consciente de que al Estado le cabe la responsabilidad de cautelar la fe pública en las instituciones universitarias y promover un buen uso de los recursos y medios que la sociedad pone a su disposición, introduce algunas regulaciones públicas, que pueden ciertamente discutirse, pero que se diferencian de las tradicionales reglamentaciones burocráticas. En primer lugar, porque las más importantes quedan, en el fondo, en manos de los propios

universitarios, aunque su mirada se haga desde afuera. Y también, porque se trata de regulaciones que parecieran concebidas para operar de modo más bien indirecto, a través de estímulos e incentivos que tienen por misión inducir a las instituciones universitarias a que ellas mismas orienten su desarrollo en función de objetivos y metas de calidad, equidad y eficiencia que resulten de su propio análisis de la realidad institucional.

Es indudable que este nuevo tipo de regulaciones, aun con esas características, implica algunas limitaciones a la autonomía universitaria, sobre todo si se la entiende del modo tradicional. La evaluación institucional y la acreditación de las carreras de posgrado y de algunas carreras de grado que forman profesionales que en su ejercicio pueden poner en grave riesgo la salud, la seguridad, los derechos o los bienes de los habitantes, son un claro ejemplo de ello. Pero las razones que justifican tales regulaciones, y el modo en que se propone ejercerlas, parecieran una invitación a repensar el concepto de autonomía, que es ciertamente esencial para la vida universitaria y para la construcción de una sociedad democrática, pero que no equivale a soberanía. ♠

**IMPRESO EN LOS TALLERES GRAFICOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION
AVENIDA DIRECTORIO 1781, BUENOS AIRES, REPUBLICA ARGENTINA**